BOLETIN DE NOTICIAS
COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email: cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.
En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO: 153 **FECHA: 1 de Octubre de 2012**

AMÉRICA LATINA

ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO, EL PROYECTO GLOBAL MÁS NEOLIBERAL QUE HEMOS CONOCIDO. ¿SABES QUÉ ES EL TPP? SE NEGOCIA EN SECRETO Y AMENAZA LA SOBERANÍA

El gran proyecto comercial y político de Obama se llama TPP. Dicho en castellano: la Asociación Transpacífico, un megabloque comercial que pone en riesgo la soberanía de los países que están negociando. Chile, Perú y México son parte de los 12 países que pueden sellar el proyecto global más neoliberal que hemos conocido hasta el día de hoy.

El 6 de septiembre de este año inició la 14ª ronda de negociaciones de la Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) que, según el presidente Obama, constituiría el modelo de acuerdo comercial "de alto nivel" para el nuevo siglo, que pronto podría aplicarse en todo el mundo. En estas negociaciones han venido participando nueve países que bordean el océano Pacífico: Estados Unidos, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam.

En la última ronda, en julio, se aceptó en principio el ingreso de los otros dos socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -Canadá y México, cuyos ministros ya han participado de la ronda de septiembre- con lo cual el TPP podría convertirse en una especie de TLCAN ampliado y reforzado. Japón también ha expresado interés por ingresar, pero no ha realizado aún un pedido formal, debido, entre otras razones, a la oposición que enfrenta internamente. Toda vez, estos tres países –como otros que se sumen luego- no podrán incidir en el contenido de las negociaciones [EEUU quiere que terminen en diciembre de este año pero las diferencias entre los países lo ponen difícil].

De lo poco que se conoce al respecto –pues los documentos de negociación se mantienen bajo estricta reserva- el TPP es un modelo altamente preocupante, pues va aún más allá de la mayoría de tratados precedentes. Exigirá la modificación de numerosas leyes internas de los países signatarios respecto a derechos de propiedad intelectual, inversión y protección ambiental y otros temas.

Permitiría a las empresas extranjeras enjuiciar a países soberanos si imponen restricciones que afecten sus intereses. Amenazaría el acceso a medicamentos esenciales en los países en desarrollo, y haría peligrar el libre acceso a la información en Internet. Pero sobre todo, el TPP se negocia con una falta total de transparencia, que hace que la ciudadanía no pueda opinar sobre decisiones fundamentales que comprometerían a sus respectivos países y su soberanía durante las próximas décadas.

¿Qué busca EEUU?

El TPP inició como un modesto acuerdo comercial entre Singapur, Nueva Zelandia y Chile. Los países ahora participantes lo ven como una oportunidad para ampliar sus intercambios comerciales, con costos reducidos, debido al enredo actual de acuerdos comerciales múltiples que -según

un análisis publicado por la *Council on Hemispheric Affairs* –COHA- incrementan el costo de las transacciones en un promedio de 5%. Con la entrada de EEUU, evidentemente el TPP cambió de carácter y de dimensión.

En 2011, los nueve países parte del TPP generaron un PIB total de US$ 17,8 billones, del cual el 85% corresponde a EEUU, un 5% de cuyos flujos comerciales es con los demás países del bloque. Si se suman México, Canadá y Japón, el TPP-12 se convertiría en el bloque comercial más grande del mundo, con una población de unas 700 millones de personas y una actividad económica que actualmente suma alrededor de US$ 26,6 billones, informa COHA. Se ha hablado incluso de un acercamiento con China y Corea del Sur.

No obstante, EEUU ya mantiene tratados de libre comercio (TLCs) con la mayoría de los países parte del TPP, entonces para este país, no significaría mucha ganancia en términos comerciales. Más bien, hay fuertes indicios de que Washington busca aprovechar el tratado para introducir aspectos que no ha logrado conseguir por otras vías, tanto de los países contrapartes, como en su propio sistema legislativo.

Es más, en los últimos meses se ha tratado de acelerar las negociaciones con miras a concluirlas este año, si bien este plazo ya parece poco factible, debido a la resistencia de algunos países frente a varias de las condiciones que EEUU justamente está proponiendo.

Proteger las inversiones

Similar al fallido proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), este tratado abarca mucho más que solo aspectos comerciales. Contiene unos 26 capítulos que incluyen, entre otros: aduanas, servicios transfronterizos, telecomunicaciones, compras públicas, políticas de competencia, cooperación y desarrollo de capacidades, inversiones, servicios financieros, regulaciones ambientales y derechos de propiedad intelectual.

No obstante el sigilo que recubre los textos en negociación, dos capítulos han sido filtrados a la luz pública, que permiten apreciar el tenor de los contenidos. Se trata de los capítulos de inversiones y de propiedad intelectual.

En junio de 2012 se filtró el capítulo de inversiones, uno de los más controvertidos. En el documento se hace una definición muy amplia de la inversión, y se propone cláusulas de protección que cubrirían no solo las inversiones extranjeras existentes, sino también acciones y derivados, asociaciones público-privadas, minería, licencias y permisos de manufactura, e incluso las ganancias futuras estimadas. Prevé nuevas salvaguardas para inversores que podrían limitar severamente la capacidad de regulación de los Estados parte.

Adicionalmente, el capítulo de inversiones prevé el recurso a un tribunal internacional de arbitración –como el CIADI u otro- para resolver litigios entre inversores privados y Estados nacionales. Implica expandir la experiencia del TLCAN y otros tratados similares, que permiten a las empresas cuestionar leyes nacionales -incluso las que protegen el interés público- y exigir una compensación si consideran que afectan sus intereses.

Hasta ahora, como resultado de juicios de este tipo bajo los parámetros de TLC existentes, los países en desarrollo han tenido que desembolsar más de $350 millones de dólares en compensación a corporaciones privadas. En otros 17 reclamos pendientes, por un valor total de más de US$ 12 mil millones, todos tienen relación con políticas de medio ambiente, salud pública o transportación, y no con asuntos de comercio internacional. Solo Australia, hasta ahora, ha puesto una cláusula de excepción al acápite sobre arbitraje, que le eximiría de someterse a estos tribunales.

Otro tema polémico son las propuestas que limitarían la capacidad de los países de adoptar medidas precautelarías contra la especulación financiera. Chile, en particular, rechaza tales propuestas.

Propiedad intelectual

El capítulo de propiedad intelectual se filtró en febrero de 2011, y desde entonces desató fuertes cuestionamientos. Según el análisis publicado por COHA, de todo el TPP, este capítulo parece ser el que “incorpora los cambios más sustantivos al derecho internacional”. Los derechos de autor propuestos son desmedidos, superando incluso lo ya existente en EEUU: se extiende el periodo de

protección a un mínimo de 70 años luego de la muerte del autor, o a no menos de 95 años desde la primera publicación autorizada. En la ley estadounidense, los 70 años es el tope, mientras que el acuerdo TRIPS de la OMC fija ambos plazos en 50 años.

Es más, el documento retoma contenidos que podrían limitar el libre acceso a información en Internet, como se lo intentó con SOPA –el Stop Online Piracy Act o ley contra la piratería en línea- que no pasó en el Congreso estadounidense debido a la fuerte oposición ciudadana. Si cláusulas similares se insertan en el marco de un tratado internacional como el TPP, podría permitir circunvalar el proceso legislativo nacional.

Otro aspecto cuestionado de este capítulo del TPP se refiere a la facilitación y expansión de estándares de patentabilidad. Por ejemplo, permitiría patentar pequeñas modificaciones a una invención existente, un subterfugio que las empresas farmacéuticas utilizan para poder renovar indefinidamente las patentes de los medicamentos y demorar la introducción de versiones genéricas. El documento especifica también que se podrá patentar plantas y animales –algo que muchos países prohíben-, como también métodos de diagnóstico, terapia y cirugía para el tratamiento de seres humanos o animales.

Una mayoría de los países parte se resisten también a extender los monopolios farmacéuticos, como lo propone EEUU. Además, Australia y Nueva Zelandia no aceptan medidas que permitirían a tales empresas objetar su práctica de fijar los precios de medicamentos para su sistema de salud pública.

Un atentado al proceso democrático

El comercio entre Latinoamérica y Asia ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas y hay interés por fomentarlo. No obstante, para los tres países latinoamericanos participantes –Perú, Chile y México-, que ya mantienen TLCs con EEUU, las pretendidas ventajas de estar en el TPP, dado su fuerte énfasis en el eje Asia-EEUU, son poco evidentes y representan riesgos grandes.

De hecho, Chile, antes considerado un signatario seguro, ha puesto en duda su firma si no se flexibilizan las provisiones en propiedad intelectual. Toda vez, llama la atención que, en estos países, hasta ahora el TPP no ha sido objeto de mayores manifestaciones de rechazo por parte de los actores sociales que se movilizaron contra los anteriores TLCs, hecho que sin duda va de la mano con el casi total desconocimiento públicodel proceso de negociación en curso.

De hecho, en 2010, los países participantes habrían acordado no divulgar los textos de negociación, sino solo cuatro años después de cerrar las negociaciones, sea o no que éstas culminen en un acuerdo. Únicamente los propios negociadores –y según parece un grupo selecto de socios corporativos- tienen acceso a los documentos. Ni siquiera los comités parlamentarios concernidos pueden conocerlos. Las entidades ciudadanas o empresariales pueden someter propuestas -y de hecho varias lo han hecho- pero no están en capacidad de reaccionar frente a lo que realmente se está negociando.

Siendo un texto que comprometería la soberanía y cambiaría las legislaciones nacionales, ello constituye un verdadero atentado al proceso democrático. EEUU apuesta a que este tratado podría ser el último que tenga que negociar, pues a futuro otros países simplemente tendrían que sumarse a lo ya negociado. Siendo así, resulta aún más aberrante la falta de transparencia en el proceso de negociación. Y sin embargo, ese es el tratado “modelo” que propone Obama…

Con estas inquietudes, la red estadounidense Just Foreign Policy ha lanzado una campaña de financiamiento (bajo la modalidad de “crowdsourcing”), para recompensar a Wikileaks en el caso de que logre filtrar al público todo el documento de negociación del TPP. Su publicación, según la organización, “demostraría que Wikileaks sigue siendo relevante a la demanda ciudadana de transparencia gubernamental… y que la campaña de Wikileaks a favor de la transparencia gubernamental no concierne únicamente a asuntos relacionados con la guerra, sino que se extiende a todas las áreas donde la acción secreta de los gobiernos amenaza el interés público”.

Fuente: Sally Burch. Alainet

COLOMBIA

EL VIEJO PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA - A LA PUERTA DE LO NUEVO

Capital de sangre y letras

Ya podemos contar miles de páginas sobre una noticia producida como declaración oficial el pasado 27 de agosto de 2012, sobre un hecho que sin dudas es trascendental: el inicio de conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

Sangre y tinta han resultado mezcladas durante mucho tiempo. Como en el actual momento, el conflicto colombiano abastece desgracias para vastas y variopintas bibliotecas, para montañas de libros. Sin embargo, pese a tantísimos y voluminosos diagnósticos provenientes de muchas maneras de ver y sentir, todavía reina más la percepción de que no es inteligible, que nada se aclara en esa guerra compleja, que no es posible entenderla, que una especie de caos lo cubre en ella casi todo. Más cuando a esa historia de oposición armada ininterrumpida de medio siglo, entre un Estado de formalidad democrática y unas guerrillas de inspiración marxista, guevarista y bolivariana, se agrega la existencia de estructuras del narcotráfico o la aparición de grupos paramilitares, presentados como poderosos agentes y tramas particulares con vida propia. Se enredaría así tanto la realidad que sería falso un entendimiento purista, típico o clásico basado en el antagonismo político.

De esa mirada en el supuesto laberinto que aconsejaba no repasar remotos orígenes del conflicto, vaciándolo así de contenido histórico y de causalidad socio-económica y política, se alimentó la tesis funcional de la ininteligibilidad y la anomia, junto a la idea de que el Estado demoliberal estaba siendo atacado por dos extremos violentos, uno en la izquierda y otro en la derecha. Por lo tanto, el corolario de todo ello era que no había nada más urgente e importante por resolver que el problema de esa clase de violencia irracional ejercida organizadamente contra la institucionalidad por delincuentes de distintas siglas. Desde ese enfoque resultaban homologables los “ilegales”. Un signo fue con los años su equiparación con la desaparición del delito político. Desde 1980 fue cada vez más usado un término estelar: el “terrorismo”.

Si algún recuerdo romántico quedaba de los años sesenta y setenta, de movimientos guerrilleros luchando contra regímenes coloniales y antidemocráticos, debía difuminarse para el caso colombiano, más cuando el mundo vio caer muros: ya no obraría esa imagen, máxime si la guerrilla cometía permanentes abusos contra la población o estaba vinculada a la producción de drogas. Si algún rezago de pensamiento crítico impugnaba directa o indirectamente a centros de dominio nacional o foráneo, o señalaba que con la violencia política algo tendrían que ver las represiones e injusticias acumuladas en procesos de configuración de países dependientes, de estructuras excluyentes, si algo quedaba de esa versión idealista, debía ser diluida en ácidas demostraciones de que la desigualdad estaba en todas partes y en todas las épocas, y que ante un sólido “orden de derecho”, como el colombiano, con reputada tradición democrática, rotundamente no era admisible el derecho a la rebelión.

Factores regionales y líneas de fuga global acentuaron todavía más dicha interpretación, en la conjugación de realidades y proposiciones políticas e ideológicas de una nueva era planetaria a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, en la que se decretó el fin de la historia y de la utopía social, bajo el peso del único modo en que podía ser concebido el mundo, atravesado por la triunfante política de un capitalismo salvaje y militarista. Con sus predicamentos fue poco a poco reduciéndose el pensamiento, despidiéndose la humanidad de las promesas de justicia e igualdad de un sistema internacional y de esquemas de administración nacional que abogaban por la regulación y el bienestar. Poderosos círculos vieron aumentar exponencialmente sus riquezas y dominio. Se impuso de esa forma el pragmatismo que aconsejaba, en cuanto a países con guerras internas que retardaban un encajamiento productivo, ponerles fin no sólo incrementando la presión militar sino también las presiones diplomática, jurídica y política. No se nos escapa que justo lo contrario también fue dictado para negocios de todo tipo y la maximización de ciertas ganancias: el agravamiento o montaje de provechosas guerras.

En consonancia y al amparo de subterfugios y prácticas extendidas por todo el mundo, las elites colombianas explotaron el rótulo de la democracia, la estampa circulante de un Estado de Derecho,

para invocar su inocencia y enseñar su condición de víctima y no de victimario. Que nada tenían que ver con la estrategia de guerra sucia o con el paramilitarismo y que las complicidades con el narcotráfico eran también marginales, accidentales, de unos pocos que se habían desviado hacia el rápido e ilegal enriquecimiento.

Han empleado la comunicación de masas y los códigos penales, han pagado el cubrimiento académico e indulgencias. Elites en mosaico: unas liberales de sofá, ayer y hoy; otras más neoconservadoras, mezcla de rigideces religiosas y políticas; unas educadas en el extranjero en modernas corrientes, otras más provinciales; unas muy prósperas seguidoras de los nuevos mercados, otras rentistas de heredades venidas un poco a menos; unas y otras acariciando siempre la refinada justificación nihilista o neofascista de quien asume, desde un escritorio o desde una hacienda, que hay que extirpar a la parte inconforme de la sociedad y tolerar para ello el arribismo de quienes ascienden y son usados para ese proyecto. Una revalidación práctica de la conducta propia y de la de quienes interpretan y cumplen el imaginario de la clientela, de los sirvientes y engranajes necesarios, donde ha habido lugar por décadas para el paramilitar, el narcotraficante, el corrupto.

Se ha ostentado en ese credo y en ese método, con notable lucimiento, que el Establecimiento era en realidad casi un tercero inocente, al que por diestra y siniestra se le amenazaba, siendo en consecuencia su deber salir a flote, no propiciar un Estado fallido. Que el deber era neutralizar y acabar con reales o figurados peligros a lo largo de distintas fases para retornar al orden.

2. Se planifica y se ejecuta. Breve recuento histórico para entender lo de hoy

Largamente han meditado y tomado decisiones las elites para producir y tener a su favor ese veredicto de inocencia. Cuando en los cincuenta, entre la violencia inducida por los partidos Liberal y Conservador, lograron descomponer y recomponer el país a su antojo, a punta de un terror (cerca de 330.000 muertos) que aseguró mayor acumulación de tierras para pocos tras el despojo de millones de campesinos. Cuando hacia los sesenta cerraron filas con el “Frente Nacional” en torno al reparto milimétrico de la burocracia y en general del poder entre esos dos partidos dominantes y resolvieron excluir de la rutina electoral a otras expresiones, en aras de la alegada estabilidad. Cuando en los setenta acentuaron un modelo de crecimiento que expulsó a medio país a la marginación e implementaron una represión brutal sin necesidad de caer en los rasgos abiertos de las coetáneas y “repugnadas” dictaduras militares, para aplacar en “democracia” la inconformidad social. Cuando en los ochenta escalaron la guerra sucia contra el movimiento popular, sindical y político de izquierdas. Cuando en los noventa mudaron de Constitución, fijaron la definitiva desmovilización de unos grupos guerrilleros, desarrollaron la política neoliberal y desataron las manos para alianzas hacia el pleno empleo paramilitar y la intensificación de una economía global y local de pillaje.

Elites no sólo sagaces sino bien aconsejadas, en algunas capas convencidas o persuadidas tanto de una doctrina social católica como todavía de los cánones humanistas de cuño liberal o resquicio ilustrado, que hicieron posible desde comienzos de los años ochenta reflexionar sobre la conveniencia de un clima de reconciliación y decidieron, sin dejar de codificar la violencia propia, ensayar con intermitencias la fórmula del diálogo político para obtener el desarme de los rebeldes.

Esa política de paz bajo ciertas condiciones se ha sostenido en diferentes Gobiernos de varias maneras, desde los tiempos del conservador Betancur (1982-1986), quien se refirió entonces a las “causas objetivas” de la violencia política, pasando luego por los liberales Barco y Gaviria (1986-1994), que ganaron la renuncia a las armas por parte de algunos grupos insurgentes a los que a cambio se les dio alguna cabida en el sistema político, quedando por fuera los más arraigados y radicales: las FARC y el ELN. Con éstos se volvería a conversar años después, siendo muy conocido el último proceso de conversaciones con las FARC (durante la presidencia del conservador Pastrana, 1998-2002), el cual, por su fracaso, significó no sólo la justificación o lanzadera de la solución militar frente a la guerrilla, profundizando el llamado “Plan Colombia”, sino de la plataforma propicia para mentalizar sobre una especie de “solución final” neofascista ante el espectro o potencial de organizaciones de izquierda o simplemente de tejido popular, a ser extirpado sobre todo en las zonas de prospección e inversión económica que debían estar limpias de rastros subversivos. La cifra acumulada de cerca de cinco millones de desplazados lo atestigua.

Así se probó el plan de hablar de paz mientras se hacía la guerra, sabiendo que la guerrilla hacía lo propio y que aumentaba su presencia política y su fuerza militar. Una insurgencia que no escondió estar tras una agenda de avances y cambios sociales, que el sistema no concedería, y que lo razonó cuando en la región comenzaron a suscitarse importantes transformaciones políticas (en particular en Venezuela). A sabiendas del fiasco casi todos estaban preparados. Por eso otro plan estaba cocinándose. Pastrana lo ha reconocido varias veces, una de ellas hace pocos días: "*Al Caguán llegó un Estado derrotado y salió armado hasta los dientes gracias a mi plan B, que consistió en fortalecer a las Fuerzas Armadas y en conseguir, como se consiguió, la ayuda norteamericana de US$7,5 billones del Plan Colombia que le permitieron a Uribe enfrentar a las Farc, lo cual logró finalmente traerlas, de nuevo, a la mesa. En el Caguán se sentaron las bases para una paz desde una posición de fortaleza del Estado*" (diario El Espectador 08.09.12).

Dos personajes en la continuidad: Pastrana, presidente hijo de ex presidente, y Uribe, de quien hablan miles de páginas, muchas de ellas en expedientes judiciales, por confesiones o testimonios de sus socios. Aliado de narcotraficantes desde los ochenta y auspiciador de paramilitares en los 90, fue puesto al mando del Estado en 2002, tras certificaciones de la lógica de una vida política urdida entre la mafia y el gamonalismo. Sabía ordenar porque sabía hacer y contaba con padrinos.

De esa forma, al inicio del presente siglo, adeptos de diferentes estamentos nacionales y extranjeros atornillaron a Uribe Vélez como máxima cabeza y personalidad ejecutora. Aunque no provenía de esa oligarquía férrea y de sus círculos selectos, sí había dado constantes muestras de fidelidad a un proyecto, con sangre fría y temeridad, encajando y encarnando personalmente los componentes más reaccionarios, aparentemente disímiles pero unidos en los resultados de un pacto de gobernabilidad que rayaba a diario en la ilegalidad, compartida por políticos nuevos y de vieja estirpe, por intereses y negocios estratégicos de multinacionales, por administradores nativos, por hacendados paramilitares y narcotraficantes. También por quienes desde la pantalla, el púlpito, la cátedra o la tribuna, moldean letras de una ininteligibilidad útil que argumenta y dibuja, como única salida posible, la barbarie necesaria por encima de la mesura, y la impunidad por encima de la responsabilidad. Mirar hacia otro lado no era problema. El Estado de Derecho se mantuvo así, pudriéndose y volando en mil pedazos.

La mayoría de una sociedad aleccionada hizo lo propio: no oír, no ver, no hablar, y aplaudir. Esto ha recibido el nombre de "cohesión social". Requería atacar con diversidad de medios legales e ilegales las distorsiones sociales a una economía de mercado y a ese modelo de adhesión que tenía como base la "seguridad democrática" para la "inversión" y el "desarrollo". Es decir, omitir los controles del declarado Estado de Derecho y al tiempo emplear éste para infundir y articular, con el uso eficaz de la fuerza, objetivos e instrumentos de una "guerra total" contra un enemigo externo (la patentó la visión contra Venezuela) y sobre todo contra un enemigo interno.

Nunca antes en Colombia la propaganda como parte del arsenal autoritario había fortalecido tanto y en tan poco tiempo una "cultura" de alienación, cesión y renuncia, no sólo de efectos éticos sino psico y sociopatológicos, de enervación de la histeria, semejante a la de reconocidas experiencias fascistas. Se abrazó un ideario y el liderazgo del uribismo cuando ya existían pruebas de constituir un circuito corrupto y criminal. Un *Síndrome de Vichy* a la colombiana: la sintomatología de colaborar o simpatizar con quien hace más servil y empobrece al conjunto de la sociedad.

En materia de paz su modelo fue de transacción y utilización del paramilitarismo como "interlocutor" para trasponerlo o reciclarlo en otra etapa, mientras buscaba, para legitimar éste, poner en la balanza un proceso de sometimiento del ELN, que dicha organización rebelde al final desestimó al comprobar esta argucia y otras. Para Uribe no podía ser ni parecer una negociación horizontal ni con esta guerrilla ni con las FARC, sino implacablemente debía dar lección de que su oferta era la de la rendición, la del desarme definitivo de "los terroristas". Para ello se impulsaron planes y estructuras que habían sido cimentadas en décadas por encima de referentes éticos y jurídicos del bien común, favoreciendo la expansión e impunidad del terrorismo de Estado mediante acciones directas de las fuerzas armadas gubernamentales o a través del paramilitarismo. Es una verdad absolutamente demostrada. Así como los resultados de beneficio de esa violencia para una economía de despojo y saqueo.

En ese pacto de refundación política proclamado en nombre de la “seguridad democrática”, no era simple espectadora esa rancia oligarquía de linajes y apellidos que se remontan a la historia preeminente del siglo XX. Las castas de los poderosos dueños del país y de agentes económicos en distintos sectores, fueron benefactoras y beneficiarias directas de un modelo a sabiendas abiertamente criminal, pero escabroso incluso en parte para ellos mismos, autoinmune (atacando las células del propio organismo a defender) y a la postre infructuoso si no era capaz de habilitar una transición o apaciguamiento. Se movían así entre la necesidad de que permaneciera Uribe, aunque su genio y figura de salvador estaba pasando a otro tiempo, desgastando y comprometiendo las reglas de un instrumental a recobrar, y la obligación de renovarse para consolidar un programa de país por encima de un caudillo ya empañado, con un entorno contaminado por múltiples investigaciones por narcotráfico, paramilitarismo y corrupción. El atornillado se atornillaba y la madera estaba en riesgo. La “solución final” o “guerra total” no fue tal y se hacía inapelable una irrupción más inteligente y normalizadora, desde adentro y sin franca ruptura.

Dicha alternativa la representó nada menos y nada más que Juan Manuel Santos, el más notable Ministro de Defensa en los ocho años de Uribe en la Presidencia. Político formado en nuevos ritmos, hijo concienzudo y estudioso de esa oligarquía, fue respaldado como expresión aguerrida pero menos peligrosa, igual de ejecutiva y similarmente atractiva para las elites y centros de poder económico y político. Fue posicionando su nombre como heredero en la órbita de un Establecimiento que estaba recompensado con creces a Uribe Vélez. Santos lo halagó poniéndolo a la altura histórica de Simón Bolívar. Lo aduló. Prometió no ceder el legado. No dejar caer el testigo de la lucha anti-terrorista. Lo relevaba para ser su fiel escudero. Las palabras de odio a la subversión que se grabaron con fuego en la piel del país no deberían borrarse.

Pero un nuevo ciclo se abría por diferentes estimaciones o razones, entre ellas la de un cálculo económico. El recurso al diálogo hace parte de esa razón pragmática que también ha virado hacia la guerra como opción. Ante ese umbral llegó Santos audazmente, con la insignia de estar Colombia, “ahora sí” en “el fin del fin”. Debía intentarse por lo tanto abordar a una guerrilla virtualmente derrotada, debilitada en el período Uribe con la combinación de todas las formas de lucha que es capaz de implementar el sistema. Debía intentarse finiquitando en la mesa de diálogos un conflicto negado sistemáticamente pero ahora sí reconocido, descifrable y superable a partir de las claves de quien conmina complementando la obra de una larga guerra con una adecuada propuesta de pacificación convenida, que admite una rendición decorosa de la contraparte.

3. Conversar sí: con derrotados

Esa es la vieja tesis expuesta por López Michelsen, un ex presidente liberal hijo de ex presidente, contemporáneo del ex presidente Santos, el tío abuelo del actual presidente. La mención a las familias no es baladí. En la misma cuna, López dejó esa sentencia, no contradictoria sino plenamente congruente: dialogar con la guerrilla una vez se le someta militarmente. Es más que una frase: constituye un pensamiento extenso desde el cual se adopta un procedimiento racional para ellos, que ya ha resultado eficiente en pasados procesos con otras guerrillas desmovilizadas. Siendo lógico y universal, en Colombia ha adquirido sin embargo una especial connotación.

Más allá de la mecánica militar, esconde una dialéctica que les inculpa, que les señala como dirigentes que han resguardado sus respectivos botines pero que han fallado en un proyecto de República y básica democracia liberal. Una dialéctica que desplaza la problemática principal, la social y económica junto a las garantías del ejercicio político. Viene a significar o traduce que lo importante es conversar sobre el síntoma (la guerrilla y su reincorporación a la vida civil) y no sobre el fenómeno de fondo una y otra vez actualizado en el conflicto: la necesidad de reinserción social del Estado, la reinserción a un compromiso de democracia de los medios del poder político y económico.

Es decir, se piensa qué harán los guerrilleros para deshacerse y hacer parte de la política institucional, pero no qué hará la clase política y empresarial frente a la crisis permanente que regula una violencia estructural en sus expresiones socio-económica y política, con resultados a la vista: el tercer país más desigual del planeta, de vergonzosa indigencia, con índices extremos de marginación (considerando incluso la “irradiación” de los recursos del narcotráfico entre otras piezas de la economía y la sobreexplotación de sectores estratégicos); y galería del ejercicio del terrorismo

de Estado, donde deambula el grito por más de 35 mil asesinados, por más de 50 mil detenidos-desaparecidos, por miles de torturados, por millones de desarraigados y miles de refugiados, por el exterminio de partidos políticos de izquierda y sindicatos, por la persecución y criminalización de comunidades y organizaciones populares.

No sólo se trata de dos monstruosidades conocidas, la pobreza y la violencia, sino de sus "intensidades suficientes", que en condiciones éticas colectivas son o serían escandalosas, inauditas, inadmisibles, y del tronco al cual están sujetas o enlazadas: la impunidad, que las blinda y reproduce sistemática y ordenadamente. Es la mayor rémora, el mayor atascadero para la paz, un trípode en la experiencia primordial, que explica las razones por las que nada fundamental todavía ha sido removido en ese statu quo violento, corrupto y excluyente. Por el contrario: su eficiencia ha sido contrastada. Ciertamente la eficiencia temporal y selectiva, para un par de generaciones de capas prósperas en medio de la guerra, mientras el país como conjunto de las mayorías sociales ha conocido desgarramientos y carencias abismales.

Es el paradigma que se mantiene al día de hoy en el ensayo de los procesos de paz, orientados en esencia por la misma elite cuyo aprendizaje está marcado por dos lecciones: se puede no sólo vencer en parte a la guerrilla por las armas, sino convencerla del todo sobre las bondades y posibilidades dentro del sistema. Si no obligaron a cambios en activo como alzados en armas, nada obliga realmente a que esa transformación social se produzca por la firma de acuerdos de paz, una vez desarticulada la amenaza insurgente. En consecuencia, la paz puede no sólo resultar muy barata, sino ser suscrita como pactos que al final no se cumplen, obteniendo los parabienes y la relegitimación una clase política y empresarial que puede así proseguir con ligeras variaciones en las dos dinámicas concomitantes: el control económico y el control político. Es la experiencia que debe ser reconocida para entender el momento actual.

4. Lo que motiva el proceso del 2012 y año(s) venidero(s)

Existen proposiciones políticas engañosamente diáfanas, que ocultan elementos de la realidad. Una de ellas es la siguiente: si la guerrilla no fue capaz de hacer la revolución en más de 45 años de lucha ¿por qué las elites van a hacer esa "revolución" por ella, ya vencida, mediante pactos o decretos que les obliguen a las clases altas a ceder? Es una pregunta justificada y hecha por los sectores de poder instituido, una interpelación nítida que esconde mil aristas.

Desde esa argumentación lineal, Santos no abandona por supuesto la dura acción militar ("el garrote"), pero, consecuente con esa historia y perspectiva de usar los diálogos para la rendición, que ha intentado la alta clase política, desgrana de nuevo una prudente oferta de rápido y seguro sometimiento judicial, político e ideológico en condiciones de favorabilidad ("la zanahoria") a las dos organizaciones guerrilleras, las FARC y el ELN, que años atrás renunciaron a desmovilizarse y que han persistido en sus acciones armadas (con evidente retorno a formas irregulares) y programas políticos de resistencias y construcción de poder (ya no de "toma" del poder).

Santos lo hace y junto a él el Establecimiento (que en su mayoría ha aprobado este nuevo intento) sabiendo muy bien dos cosas aparentemente contradictorias: la guerrilla ya no podrá vencer reemplazando un modelo, ya no es una amenaza para el régimen político y económico en su totalidad, pero al no ser del todo dominada o aniquilada, al subsistir y reponerse paulatinamente como tejido de resistencias en un tiempo de creciente despertar social, es una distorsión. Una grave distorsión. Lo es al reconfigurar articulaciones tras una larga e intensa ofensiva militar y paramilitar contra la población, contra la guerrilla y sus bases sociales; una ofensiva prolongada que ha combinado diversos recursos que van desde la motosierra, las vejaciones, el horno crematorio, las operaciones de secuestro o bombardeo en el extranjero, el mercenarismo, hasta la altísima tecnología de punta, aviones no tripulados, miles de toneladas de explosivos, billones del presupuesto nacional y asistencia extranjera, reingeniería en todas las fuerzas armadas, asesoría en inteligencia.

Pese a todo eso, sigue siendo la guerrilla una distorsión en muchos sentidos, sobre todo una distorsión económica: obstaculiza el desenvolvimiento correcto de las actividades y reglas del mercado neoliberal y sus ambiciosos planes para Colombia. Desde la lógica de la dominante mercantilización, todo lo que contrarreste, retarde o condicione ese proceso del capital más salvaje,

es considerado un obstáculo a remover. El diálogo podría surtir esos efectos de disuasión definitiva de esa histórica distorsión.

Tras asegurar que de hecho existe ya un sometimiento militar, que produjo el llamado debilitamiento estratégico de la guerrilla, el actual Gobierno colombiano y su política es producto de un acumulado tangible. Por lo tanto, hace cálculos y adopta una matriz inteligente dentro de otra más histórica de un orden de relaciones. Al concretarla se cruzan reediciones y agregados: una mejor posición internacional y regional, bien distinto el mapa a como lo dejó Uribe, en tensiones fronterizas muy peligrosas, en particular con Venezuela; una política de cambio superficial de lenguaje, de reconocimiento del conflicto, de la existencia de comunidades sufrientes, con guiños a la guerrilla y el envío secreto de mensajes y emisarios; un profesado respeto al poder judicial; una visión de las "causas objetivas" de la violencia para el impulso de medidas reparadoras de fuerte impacto simbólico, entre ellas las leyes de víctimas, de tierras y la política de vivienda, al lado de otras de asistencia social a estratos pobres.

Todo ello no es una revolución por decreto sino parte de un programa reformista de gobierno neoliberal. Al margen de que resulte efectivo el proceso de paz, de que la guerrilla lo pida o no, Santos ha diseñado un avance en políticas sociales compensatorias, para no sólo contener el creciente y sobre todo el previsible descontento social, que en momentos de crisis general y desaceleración coyuntural puede influir en un clima adverso para su rumbo inversionista y de estabilidad, sino para legitimar un modelo empresarial de intervención "sensible", a fin de paliar con poco las consecuencias de sus "locomotoras" de desarrollo económico, o sea de explotación y acumulación intensiva, sobre todo la de la economía extractiva, la extensión de infraestructuras para el mercado y la de una modernización del agro.

En esa matriz deben tenerse en cuenta características más estructurales, como la adscripción a una política dominante con centros en Washington y otras capitales del norte donde se cotizan apuestas sobre la suerte de Colombia y sus recursos, es decir en el marco actual de la administración de una crisis globalizada para la que Gobiernos y entidades a favor del mercado ilimitado y la especulación buscan soluciones todavía más desintegradoras, segregadoras y depredadoras, de privatización, de mayor ajuste de la inversión social con recortes o supresión de derechos. Frente a esto el Gobierno Santos tiene un dilema que no es sólo del Establecimiento colombiano, sino de otros países cuyos nodos de poder pueden resolver todavía con amplio margen las vías de tránsito: hallarse ante ascendentes procesos de integración regional de signo "soberano" y social, independientes respecto de Estados Unidos y Europa (el conjunto del ALBA, del que Colombia no es parte, la UNASUR, la CELAC). Un país en guerra permanente como Colombia, así sea ésta de menor intensidad, es una verdadera amenaza regional, una real distorsión en el vigente y en el potencial circuito de países que definen nuevos derroteros de relaciones económicas, políticas, sociales y de seguridad. Santos ha comprendido este requerimiento al que no puede apuntarse Colombia con la carga de un conflicto armado no resuelto.

Otro factor a tener en cuenta tiene que ver con la proyección de fuerzas y realinderamientos electorales. Asumido por Juan Manuel Santos el Gobierno en agosto de 2010, por un período de 4 años, le quedan dos años de ese primer mandato y existen claras posibilidades y una no escondida pretensión de reelección (2014-2018). El proceso de paz, manteniéndose la mesa de conversaciones, incluso fracasando ésta, sin haber puesto en riesgo alguno la estabilidad del Estado, sin haber cedido en materias fundamentales para el Establecimiento, y por lo mismo, es ya una baza política. De hecho, el manejo gubernamental del proceso está apuntando a unos bajísimos costos en caso de venirse abajo el intento de desarmar a la guerrilla. No sólo por conveniencia de Santos. Corresponde al corsé puesto por los grupos de poder que han consentido mayoritariamente esta aventura como en otras ocasiones, a la espera de cómo se comporta la parte antagonista.

De ahí se comprenden diferentes rasgos de un proceso como el actual, en el que no se deben repetir "errores", que se juzgan tales por el bloque dominante, en comparación con otros procesos de paz. Vale reseñar tres muy importantes. Primero: que no sea un largo y fatigoso proceso, sino un proceso de paz express y ejecutiva. El ex presidente Ernesto Samper (1994-1998) lo explicó así en septiembre de 2011: "*Necesitamos una paz express, que sea rápida, discreta y eficaz. Se conseguirá el día que se puedan sentar en una mesa fuera del país, sin ningún tipo de presión, el*

gobierno con los representantes de los alzados en armas" (http://www.rcnradio.com). Es algo que puede cambiar en el curso mismo de los acontecimientos. Segundo: Santos decide hablar con la guerrilla fuera del país, sin reconocer dominio territorial alguno, sin oficializarlo con órdenes de despeje, como sí lo hizo el Gobierno de Pastrana en el Caguán. Dialogar en estas condiciones fuera de Colombia es más ventajoso ahora para el Estado que para la insurgencia. Es no obstante una realidad que puede cambiar. Tercero: decide el Gobierno no cesar operaciones militares. Bajo el fuego y su lógica de avance se desarrollarán simultáneamente los diálogos de paz. A mayor éxito militar del Estado, hay menos por discutir en la mesa, menos que ceder, y menos que pedir por los rebeldes. Es una dimensión de la conocida sumatoria cero. También es un tema que admite variantes. Una tiene que ver con la posibilidad de acuerdos humanitarios o de regulación, tema que está ausente de la agenda acordada por ahora entre el Gobierno Santos y las FARC. La agenda misma puede cambiar. De hecho se alterará al abrirse una mesa de diálogos con los rebeldes del ELN.

Sobre esta última anotación, respecto a esta ecuación de fuerza, debe destacarse que es la que también atraviesa y funda por ahora el Marco Jurídico para la Paz, que es la reforma constitucional aprobada en 2012, según la cual pueden definirse normas para una justicia transicional y un relativo reconocimiento del delito político, en la medida que avancen las negociaciones con la insurgencia: obtendrán hipotéticamente las guerrillas de las FARC y del ELN cierta favorabilidad jurídica, respecto de algunos delitos, y favorabilidad política, para participar de escenarios y mecanismos electorales o de representación, según lo que renuncien y según vaya avanzando el Estado en el campo de batalla, donde saldrán nuevas coordenadas y resultados que se impondrán en la mesa de diálogos (para un análisis de este Marco Jurídico, véase en wwww.rebelión.org el texto "*La paz como rehén y la necesidad de un cambio urgente para lograrla*", del colectivo *Colombianas y Colombianos por la Paz*).

En relación con esa reforma y otros cambios legislativos como el relacionado con el Fuero Penal Militar, un vector no menos importante es la finalidad, cada vez menos inconfesable, cada vez más evidente, de una nueva homologación. Una homologación práctica que se vale de la sensibilidad sobre la paz y su banalización, llevando a que la sociedad enferma acepte la reconciliación con ardid y la impunidad con naturalidad. Al amparo de un proceso que deberá arrojar medidas de amnistía o indulto por acciones de los insurgentes, como es no sólo deseable sino lógico y necesario, en tanto corresponde a la naturaleza compleja y conexa pero diáfana del delito político, la clase política en general, por convicción, por connivencia, conveniencia o presión de la extrema derecha, sirviendo también a intereses propios muy extendidos, buscará el perdón o favorabilidad para militares, policías y para-políticos, incluso por aberrantes crímenes de lesa humanidad. Es así muy oportuno para ellos un proceso de paz, o puede ser usado, para que dentro del país la "sociedad" inducida a un desenlace de "contraprestación" y "punto final" y también afuera una comunidad internacional proclive, acepten sin problema esa equiparación entre delincuentes políticos o rebeldes, de un lado, y del otro políticos delincuentes o miembros de verdaderos escuadrones de la muerte. De nuevo, la impunidad de crímenes execrables de los poderosos y sus subordinados, reforzará sus violencias y la transmisión de su mando.

5. "No repetir errores": aprendizaje de todos

Uno de los tres principios rectores que el Presidente Santos anunció al presentar públicamente los diálogos de paz es claramente la no repetición de los errores del pasado (declaración del 27 de agosto de 2012).

El conflicto se entiende y explica sin duda alguna en una sucesión histórica, en unas raíces sociales, económicas y políticas, en un conjunto de intereses que lo han sostenido funcionalmente, con clara responsabilidad de las elites, como acá se ha anotado someramente. Por lo mismo, no se entiende el conflicto sin un aprendizaje adquirido por éstas, que buscan no repetir los errores del pasado.

Por supuesto no sólo ellas han planificado y ejecutado unas estrategias de confrontación. No sólo ellas han aprendido y revalúan a su interior otras posibilidades. No sólo ellas tienen derecho a no desperdiciar la experiencia.

El aprendizaje es también de la insurgencia. Aprendizaje también de graves errores, concernientes más a prácticas rebatibles que a razones de su lucha. Quizá por esa razón ha declarado de manera creíble su voluntad de terminar el conflicto, pero no renegando de su ideario altruista y propuestas básicas. Al contrario, manifiesta, como lo ha hecho hace décadas, que debe arribarse a una solución de consenso, siempre y cuando se establezcan las bases, se asegure lo elemental, de una democracia real que enfrente la extensa miseria, la falta de garantías para hacer política de izquierdas, o sea poder construir alternativas a las relaciones dominantes sin que cueste la vida, y que sea una solución de compromisos fehacientes que oponga una fuerza ética ante la impunidad de los poderosos. Es posible todo ello, si el proceso de paz ensambla una plataforma esencial de intervención política, o sea de reinserción del Estado a la par de la reinserción de los combatientes, para reformas efectivas y urgentes que posibiliten el ejercicio de los derechos humanos integralmente y evoluciones de la soberanía popular en el concierto regional e internacional.

En ese aprendizaje, más allá de la guerrilla, como las propias organizaciones insurgentes lo han afirmado, y también más allá de la política del Establecimiento y su control, está la actual producción humana sufriente, indignada y rebelde; están las agendas sociales y políticas de los movimientos de base, sus programas de vida, en sus muy diversas representaciones y trayectorias, que encarnan aspiraciones de las mayorías, sus exigencias de cambios, sus capacidades de poder. Es lo que no sólo hará de este proceso un novedoso y promisorio encuentro de voluntades, sino lo que podrá determinar una dialéctica que al tiempo que no desconozca la larga génesis y las dilatadas bifurcaciones del conflicto, proponga su superación reactualizando la historia de las injusticias en el plano de sus soluciones racionales, refutando lo absurdo de la inequidad, señalando lo que hoy día es insostenible en materia económica, social y política. Es decir, superando el enfoque de una pacificación o paz menesterosa.

Dicha participación social requiere del respeto a la palabra y a la acción de esos sectores populares, para lo cual no basta su puntual y formal figuración en una audiencia, sino que debe exhortase a que se den garantías fiables para su ejercicio. Ello no podrá surtirse sin ser neutralizadas las amenazas que ya claramente provienen de la extrema derecha, que pide “liquidar” los nacientes movimientos sociales y políticos, como puede verse en la carta contra el proceso de paz del ex general Ruiz Barrera, en nombre de una asociación de militares en retiro, o en las declaraciones de fanáticos seguidores uribistas. Es por esa razón muy frágil el proceso de paz, no ya por no existir un cese bilateral del fuego, el cual puede pactarse y verificarse, sino por los atentados que se ordenen desde esa extrema derecha que ya ha probado históricamente la eficacia de sus medios para enfrentar aún más a las partes en contienda y para separarlas de una salida política. Una extrema derecha que se ha posicionado tras intentos fallidos de diálogos, como fue el ascenso de Uribe a la Presidencia en 2002, una vez fracasó el proceso del Caguán con las FARC.

Santos formula un proceso presuroso y fugaz, que debería terminar hacia la mitad de 2013. Una razón es que el Gobierno y el Establecimiento en general saben que sobrevendrá un escenario de crisis y disputa por recursos y negocios estratégicos, conforme la economía neoliberal atrae esa crisis, la agrava y causa todavía más peligros o perjuicios sociales y económicos, tratando virtualmente de superarla con las mismas lógicas y nivel del problema. Un proceso de paz, como simple pacificación política o dejación de armas de la guerrilla, aclimataría para mejores condiciones de explotación, así como aquietaría también políticamente los ánimos de sectores en vías de exclusión, que demandan derechos y que pueden movilizarse. Unas agendas de resolución de un conflicto crean, por el contrario, ilusión dilatada, que tienen el efecto duradero de que se espere de ellas remedios a largo plazo.

Ese proceso presuroso y fugaz ha impuesto un ritmo también acelerado a organizaciones y plataformas sociales, no preparadas suficientemente para esta celeridad, cuyos caudales pueden ser afectados si no son bien orientados: pueden causarse graves quebrantamientos, exposición y confusión. Desean, con gran disparidad, en poco tiempo, siendo su derecho, articularse para recoger organizadamente las energías, reivindicaciones y construcciones alternativas. De todas ellas depende que los resultados del proceso de paz perduren y se interpongan, como compromisos y formas de cumplimiento efectivo, a las lógicas adversas impuestas por el mercado neoliberal y su guerra sucia, que, en cambio, sí han tenido años para echar raíces, para afincarse en las más óptimas condiciones de seguridad para ser implementadas; que han tenido hasta ahora las manos

libres para desplazar y depredar; para sembrar desplegada y convenientemente de penuria la vida material y espiritual de millones de colombianos. De ahí que, no solamente por ser una cuestión de asimetría de tiempos, sino de desigualdad de fuerzas, deben redoblarse mecanismos de fuerte control y protección para acompañar y hacer valer propuestas como son el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica y las que surjan de ese torrente de nueva organización social y política.

Si se quiere liquidar de nuevo a la izquierda, como ya apuntan quienes desde altísimas posiciones de poder o como mandos medios señalan objetivos, la voluntad del Gobierno del Presidente Santos debe paralizar esa pretensión recalcitrante. ¿Es posible sin tocar la inamovible doctrina de seguridad alojada por décadas y renovada con modernas guías autoritarias en las fuerzas militares y de policía? La promoción de cambios institucionales en esta materia no puede ser aplazada, pues de avances en esta cuestión depende la vida concreta de personas y la vida del proceso de paz. La apertura y profundización de investigaciones en curso contra los cerebros de la guerra sucia es inexcusable, es ineludible. Eludir es admitir.

La perspectiva o posibilidad de una solución política por fuerza de la realidad del poder y de cómo se detenta, depende obviamente no sólo de que se vean algo disuadidos esos cerebros y ejecutores de acciones criminales, cuyo legado es la rentabilidad o eficiencia de la violencia como medio de enajenación social y económica, sino que depende también de decisiones no altruistas sino al menos "civilizadas" que tomen los beneficiarios de esa acumulación y comunidad violenta: los grandes propietarios, las empresas acaudaladas, las influyentes fortunas, las compañías piratas. Por lo tanto conmina esta realidad a compromisos de redistribución y transferencia que marque y organice el Estado a través de la ampliación y vigor de su capacidad de intervención y de políticas públicas coherentes. En una importante encuesta de Gallup para la Revista Dinero, entre grandes empresarios, "*dos terceras partes de los encuestados no están de acuerdo con pagar más impuestos para financiar las obligaciones derivadas de un eventual acuerdo*" (http://www.dinero.com 13 de septiembre de 2012). Dichos empresarios comparten la secuencia Uribe – Santos, pues están dispuestos a gestionar lo que les haga más ricos: la guerra o la pacificación, que no se entienden excluyentes.

Frente a esos dos dinamismos, o lastres, según la visión de qué paz se quiere, un detalle del cuadro que quizá puede explicar algo tras bambalinas: Santos ha nombrado como parte de la comisión negociadora del Gobierno a un reconocido representante de la mano dura, acusado en tribunales de violador de derechos humanos, el ex general Mora; a Naranjo, un ex general de la policía consagrado y valedor de la artificiosa política de los Estados Unidos en materia de narcotráfico; del mismo modo que Santos ha llevado a la mesa a Luis Carlos Villegas, un delegado de los empresarios.

Ahora bien, no sólo les incumbe a ellos. Más que nunca, más que en anteriores procesos, donde incluso se conocieron crestas de organización social y popular de izquierdas que luego fueron descabezadas, hoy la suerte del proceso de paz como acuerdo para la terminación del conflicto armado y el establecimiento de bases para una democracia real, se relaciona o concierne directamente con la capacidad de propuesta y movilización social del bloque popular, debilitado por años, pero que resurge, por una resistencia en el límite, por la ética que de ahí se construye con indignación e inteligencia para ser distorsión a la lógica de la mercantilización y el colapso que conlleva el modelo dominante.

No es una visión romántica. No se desconoce la evidente correlación de fuerzas desfavorable en el terreno político, muy aparte de la palpable correlación negativa de fuerzas en el nivel militar de la guerrilla frente al Estado. Sin embargo, en las actuales condiciones, en tanto excluidos del sistema, de los beneficios económicos o de la riqueza nacional, expuestos en el límite donde no alcanza la regulación paliativa que el Gobierno prevé, deben ser y son esos sectores organizados el lugar y sujeto histórico de cambio y reparación. No sólo para actualizar el relato de las causas del conflicto en el orden de relaciones vigente, por ejemplo respecto de la tenencia de la tierra, para corregir políticas que lejos de aliviar consecuencias lo que hacen es hacerlas más graves, sino para abordar los desafíos del paradigma, de sostenibilidad y límites objetivos, como claramente los sitúan las cadenas globales y locales de crisis social, económica y ecológica. Así, el tema medioambiental en la mesa de conversaciones, por citar una cuestión clave, no podrá ser una discusión que

desconozca la voracidad de las maquinarias del monocultivo, de los agro-combustibles, o también la de la minería destructora a gran escala, que hoy campea por toda Colombia, "locomotoras" privilegiadas en el consorcio Uribe-Santos.

6. La solución: no en el pasado sino en el nuevo ciclo de demandas nacionales y globales

Acá se ha destacado al inicio la tesis sobre la no inteligibilidad del conflicto y cómo la aparente salida vendría de la mano de otra tesis complementaria, la de negar la solución política negociada, la de negar la confrontación política y militar, mentalizando y actuando desde los presupuestos del anti-terrorismo, arreciando sin alteridad contra el espectro de la izquierda, no sólo contra la guerrilla, desconociendo su entidad política, sino inmovilizando y descomponiendo sus presuntas o reales bases y en general todo conato de disidencia popular. Aunque se reproduzcan, ambas tesis han llegado a su límite. Ha quedado en evidencia a qué proyecto político autoritario responden y qué riesgos de implosión entrañan. Llegan al límite porque de hecho el bloque dominante replantea elementos, algunos de forma y otros sustanciales; porque ya reconoce el conflicto expresamente y atribuye un status político a la guerrilla; porque vincula paz a democracia; y democracia a derechos; y derechos a cambio social. En el grado más básico, pero lo hace.

Pero esas dos tesis perversas que parecían triunfar por siempre, llegan al límite por otra razón: son contrarrestadas esas tesis por una admirable producción humana que invoca los límites a la opresión y los encarna; un conjunto humano que social, política y culturalmente se indigna y propone, que forja y desea seguir tejiendo nuevas expresiones y alternativas, no sólo ante viejos problemas en el origen del conflicto sino ante los retos presentes y extraordinarios de un país y unas futuras generaciones en un mundo en crisis. Hoy no sólo los derrotados recobran de nuevo comprensión del conflicto, comprensión de sus causas y consecuencias, sino que enmarcan sus posibles soluciones en el fundamento de nuevos paradigmas económicos, sociales, culturales y políticos. Incluso en nuevas realidades territoriales, espaciales o geopolíticas.

Si el libreto de las conversaciones es para la rendición, aún lográndola, es un fracaso. Si hace parte de un ensayo más general planteado para un éxito sostenido de la combinación más perfecta posible de fórmulas diversas de disuasión del adversario y no de elementales cambios sociales, es decir con tal que no existan grandes concesiones "a los de abajo", será entonces a lo sumo un éxito que se mantendrá a corto y a mediano plazo. A largo plazo será una tempestad que otros heredarán. Es dejar un país donde se incubarán todavía peores violencias. Esto lo sabe el movimiento popular. Ha aprendido de experiencias propias y de procesos como los de Centroamérica, donde hoy reina la violencia estructural y otras que de ahí arrancan destructivas, sin horizontes políticos de emancipación.

Efectivamente, un acuerdo de paz en Colombia ya no puede inscribirse en el nivel de los enunciados y soluciones prometedoras que predica un sistema en crisis. Debe inscribirse no en el ciclo de regulación neoliberal que demostró su felonía y su fracaso, sino en el flujo de luchas que regional y globalmente se vienen expresando constituyendo alternativas que devuelven al Estado sus obligaciones y capacidades, con la centralidad de los derechos humanos de la población, de la ciudadanía, de los pueblos.

¿En qué puede contribuir la comunidad internacional solidaria? Puede ayudar a que se presione para la corresponsabilidad de las partes en la mesa de diálogos, para ser garantes de lo acordado y verificar que se cumpla. Y ante todo para que no se rehuya o disfrace la propia responsabilidad de Estados, de Gobiernos y empresas transnacionales que han fomentado una pavorosa realidad de expolio. Depende de que sea asumida o al menos respetada y no bloqueada la agenda de compromisos en materia política y económica; que diferentes Gobiernos, partidos y redes expresen su cooperación, introduciendo correctivos en sus medidas o relaciones con el Gobierno colombiano. Por ejemplo: se sabe cómo en España por acción o por omisión se han consentido turbios procesos penales y acciones de espionaje o de persecución a defensores de derechos humanos, a activistas no violentos sino comprometidos con una perspectiva de paz y de justicia social. Hoy esos procesos se han desmoronado y es necesario que se establezcan mecanismos para enmendar y que nunca más eso vuelva a pasar. Los Gobiernos de la Unión Europea deben por el contrario rectificar, apoyar y no obstruir acciones de una diplomacia ciudadana y popular que hacen las mujeres y hombres que acuden a esta parte del mundo a enseñarnos su lucha, para que haya solidaridad y se supere sin

nuevos colonialismos el largo conflicto colombiano. Eso se debe traducir en acabar también de manera urgente con esas listas arbitrarias y tendenciosas de organizaciones o personas calificadas de "terroristas", que están demostrando su base no sólo débil sino inútil, desde el punto de vista ético, así como su inexistente fundamento jurídico, máxime cuando el Estado colombiano ha reconocido el carácter político de la insurgencia. El ELN y las FARC deben salir de esas listas.

Todo esfuerzo de incidencia debe proyectarse en humanizar la guerra mientras se camina hacia su terminación definitiva; en pedir un cese bilateral al fuego (pedido por muchos sectores sociales y políticos, pero negado tajantemente por Santos); en hacer respetar los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; en conminar para el respeto irrestricto a las presas y presos políticos (muriendo algunos por inasistencia y maltrato en las cárceles); en aplicar medidas justas de orden penal internacional, para abrir espacio a una justicia transicional eficaz que admita y salvaguarde la resignificación de las luchas políticas; debe buscarse alianzas para la paz frente a la poderosa diatriba de sus enemigos, e impulsar un nuevo marco político y jurídico de consenso social y transformación que cuente con múltiples voces.

En el mundo de hoy, de crisis de civilización, y ante el estado del conflicto nacional, las alternativas de mayor alcance se engloban en lo que podemos llamar una cultura de resistencias para la paz con justicia. Dicha cultura debe ser realista, con los pies en la tierra, pero no puede renunciar al idealismo. Al lado del realismo de la fuerza está el idealismo de las necesidades legítimas que apelan a los valores de la democracia real. Si ésta no es más que sangre y letras, con el tiempo la rebelión resurge.

7. **Hay esperanza: puede ser un proceso superador para la paz y la justicia**

El proceso y su inusitado o acelerado impulso, traspasa ya una fase exploratoria o de aproximación, concretando y programando una dinámica de conversaciones que se ha convenido entre el Gobierno y las FARC para afrontar con amplio respaldo nacional y ayuda internacional un "*Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*", que contiene una agenda básica. Se instalará la Mesa en Noruega en octubre de 2012 y continuará en Cuba, los dos países garantes. Venezuela y Chile también acompañan el proceso, que ha sido saludado por Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y en general el conjunto de instancias y organismos internacionales y regionales.

El proceso busca ir más allá y puede paralelamente desarrollarse con el ELN, que ha reiterado su voluntad de negociar, y que sin duda enriquecerá con su presencia esta perspectiva, al ser la otra organización alzada en armas, histórica, política y socialmente relevante para una solución de fondo. El proceso será así vertiginoso y distintivo, no sólo por una concurrencia de las guerrillas, que llegan cada una por su lado a un escenario donde habían podido llegar coordinadamente, aunque es posible que más adelante se fusionen las mesas (ver la importante *Declaración* conjunta de FARC-EP y ELN de septiembre de 2012, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=156773), sino porque el Acuerdo ya firmado que sirve de horma, se abre a agendas de avances posibles y verificables para el conjunto del país.

Un pacto dinámico que se nutrirá y podrá ser irreversible en tanto puedan ser transferidos los puntos de vista y demandas de los sectores sociales que tienen pleno derecho a estar reflejados, en cuanto fuerzas y agentes que piden y construyen su participación legítima con opinión, movilización y resistencias civiles. Por eso este proceso es esperanzador.

La solución política es posible en estos momentos. Es posible construirla, porque sin olvidar la historia y los intereses o proyectos que definen a las partes, se puede y debe creer en la buena fe como capacidad de rehacer, de corregir, de reformar, de transformar. Buena fe y capacidad que se pone a prueba no sólo por la voluntad de las partes contendientes de pactar entre ellas el fin del conflicto armado, como está impecablemente escrito en el Acuerdo Gobierno-FARC del 26 de agosto de 2012 suscrito en La Habana, que puede ser enriquecido y potenciado por lo convenido con el ELN, sino también y sobre todo por las garantías para los caminos de la lucha popular y ciudadana a la mesa de los diálogos y sus resoluciones, en la medida que ya está vinculado el fin del conflicto armado con bases de la democracia y la justicia social.

Una lucha nacional y popular en progreso, hacia mínimos materiales, es la que debe estar en el centro, la que se proyecta más allá de una participación formal en ese escenario; la que puede procurar y obtener consensos sociales amplios entre diferentes sectores, expresiones y agremiaciones, por supuesto algunas detentadoras de factores de poder, que representan a quienes férreamente viven atados a sus privilegios y que deberán ceder de lo usurpado. Un conjunto de pactos factibles y verificables, de reparación y redistribución, indicarán la urgente regeneración de la política, que va desde la necesidad de combatir la corrupción en sus diversas formas hasta la suspensión de las políticas económicas directamente más lesivas, hacia el replanteamiento al menos de parte del modelo de desarrollo e inversiones.

Dependerá en lo inmediato de paralizar la mano de la extrema derecha que ha estado detrás de la guerra sucia. ¿Quién lo debe hacer y cómo? El Gobierno de Juan Manuel Santos debe y puede. Conoce bien no sólo las fuerzas armadas y de policía sino las altas esferas donde se dictan órdenes antidemocráticas, donde hoy se conspira contra el proceso de paz. Es su mandato, es su obligación, y puede lograr amplio respaldo o alianzas para ello, dentro y fuera del país.

No puede acabarse de manera trivial o tratando banalmente un conflicto tan hondo en sus causas y consecuencias, y frente a complejos retos de futuro, dialogando sólo para rendir a una parte, para una muy probable reelección de Santos hasta el 2018, o firmando pactos que no vayan a cumplirse. No puede figurar que existen posibilidades de hacer política alternativa mientras se atenta contra organizaciones sociales o no se estipulan y plasman garantías efectivas para la oposición política actual y la que puede forjarse entre propuestas de izquierda que están surgiendo y en las que puede tener cabida la insurgencia que pacte su desmovilización como guerrilla. Esa triste experiencia de exterminio y terror ya se vivió. Con los desarmados y con los que nunca se armaron.

Finalmente, debe recalcarse que si bien existe una matriz distinta a la dominante, que teje y convoca al país sin exclusiones, la que devela su problemática, la que no abandona el derecho a los cambios sociales y a garantías de que la acción política de izquierdas será respetada, es una matriz que aún habiendo superado parte de la cooptación y el miedo, tiene como urgente desafío emprender una auto-crítica, para la recomposición y repolitización del conjunto de las fuerzas populares que planteen otra correlación en su movimiento de interposición a la programación dominante, y por lo tanto otro modelo de salida política, inverso al neoliberalismo, basado en la democracia de los bienes comunes entre los cuales tangiblemente está la paz social y sus condiciones materiales de reproducción.

Dicha reconstrucción política ha enfrentado y debe enfrentar todavía tres arremetidas fundamentales. Dos ya mencionadas, que provienen del poder dominante. Y una de la izquierda misma. Del adversario discurren los mecanismos del miedo y de la captación. Que están relacionados. El miedo que se vive y la captación o adscripción ideológica y política que se pronuncia cuando se legitima un sistema que mata pobres. De la izquierda nace la tercera: la desunión o separación, por sectarismos de diferente grado y trayectorias. Evidentemente ese no es el único problema de la izquierda en su búsqueda, pero sí es el desafío más penoso y al tiempo un gran anhelo. Por eso, a contracorriente de inercias propias y dominantes, en una encrucijada realmente histórica en la que no se tiene todavía esa altura, es preciso ver y tomar aliento conjuntamente. Son fundamentales las convergencias que se están produciendo por las expresiones alternativas, progresistas, de la izquierda, de todos los que se oponen a la racionalidad de la guerra y el neoliberalismo. Por campesinos e indígenas, por afrodescendientes y desempleados, por estudiantes y trabajadores de la ciudad, por mujeres y militantes, por internacionalistas y profesionales. Sus esperas y sus límites están a la puerta de lo nuevo, son la razón de ser de este viaje. "*El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados. El tiempo está a favor de buenos sueños y se pronuncia a golpes apurados*", canta un gran trovador cubano.

Carlos Alberto Ruiz, *Doctor en Derecho. Autor de "La rebelión de los límites" (Edit. Desde abajo, Bogotá, 2008). Fue asesor de la Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto Armado en Colombia, miembro de la Plataforma Justicia por Colombia.*

CUBA

LA NED SIGUE APOSTADO AL DURO EN LA SUBVERSIÓN CONTRA CUBA

Como es ya tradicional, la NED acaba de publicar su informe anual de trabajo correspondiente al año 2011, donde vuelve a quedar plasmado el dinero que esta institución norteamericana destina para promover la contrarrevolución cubana.

En este sentido vale señalar que la NED reconoce que su trabajo contra Cuba se encaminó a trabajar con aquellos sectores insertados en el trabajo por cuenta propia, buscando utilizar este sector con fines contrarrevolucionarios, sin abandonar a los tradicionales receptores del apoyo financiero yanqui en Cuba. Asimismo, destinó cuantiosos recursos para utilizar el acceso a los últimos adelantos científico-técnicos y de comunicaciones a periodistas anticubanos y a jóvenes que respondan a los intereses norteamericanos en la Isla.

Otras líneas generales del trabajo contra Cuba desarrollado por la NED en el 2011 se relacionan con el abastecimiento a los denominados "actores emergentes" en Cuba (jóvenes, artistas, blogueros, mujeres e iglesias) y el apoyo brindado a los ex presos cubanos que salieron hacia España como parte de los acuerdos entre los gobiernos cubano y español y la Iglesia Católica Cubana. Con ese apoyo se ha financiado todo el trabajo que han desarrollado estos ex presos, en su mayoría delincuentes comunes, contra Cuba en otros países.

El programa Cuba de la NED en el 2011 invirtió un total de 1 651 642 dólares, cifra inferior a los 2 449 340 gastados en el año 2010. Pero ello no quiere decir que disminuyó la agresividad contra nuestro país. No debe olvidarse que, como agencia pantalla de la CIA, la NED también tiene sus programas secretos, cuyos montos financieros es imposible determinar.

En el 2010 los agraciados con los fondos de la NED fueron Afro-Cuban Alliance, Inc. (*$110 000),* Asociación Encuentro de la Cultura Cubana (*$91 000),* Center for a Free Cuba (*$55 000)*, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (*$60 000),* People in Need(*$103 875),* Committee for Free Trade Unionism (*$90 000),* Directorio Democrático Cubano (*$175 000),* CubaNet News Inc. (*$239 434),* Disidente Universal de Puerto Rico(*$50 000),* Evangelical Christian Humanitarian Outreach for Cuba (*$60 064),* el Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (*$200,000),* Instituto Político para la Libertad Perú (*$49 967),* el Instituto Republicano Internacional (*$800 000),* el Instituto Nacional Demócrata (*$325 000) y* People in Peril Association (*$40 000).*

Entre los agraciados con fondos en el 2011 repitieron Afro-Cuban Alliance, Inc. (*$124 466*), el Committee for Free Trade Unionism (*$85 000), el* Directorio Democrático Cubano (162 089 dólares), CubaNet News Inc. (*$252 000) y el* Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (*$177 628). También repiten el* Instituto Político para la Libertad (*$61 727), el* NDI (*$395 000),* People in Need (*$160 202),* People in Peril Association (*$49 189*), CADAL (109 128 dólares) y el Committee for Free Trade Unionism (*$ 85 000).*

Dentro de los nuevos, pero que ya algunos de ellos habían sido receptores de fondos de la NED en otras ocasiones, se encuentran el Center for a Free Cuba (55 000 dólares), FLAMUR(50 703 dólares), Asociación Diario de Cuba (83 784 dólares) y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (67 434 dólares), agrupación esta última conformada por los ex presos*cubanos que* se trasladaron a España y otros países luego de las conversaciones entre los gobiernos cubano y español y la jerarquía de la Iglesia Católica cubana. Así como los proyectos "Educación Cívica", para promover posturas contrarrevolucionarias aprovechando el proceso de cambios en el modelo económico cubano y "Reglas legales" para proveer asistencia técnica a contrarrevolucionarios internos.

De ellos sobresale el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización conformada por los ex presos cubanos que salieron hacia España como parte de los acuerdos antes mencionados y que ahora son utilizados para promover campañas contra Cuba en aquellos países donde están radicados, en especial en España, desarrollando talleres, dando conferencias, publicando artículos o desarrollando acciones hostiles y provocativas contra las representaciones diplomáticas cubanas. Para todo ello recibieron 67 434 dólares, lo cual evidencia que no todos estos ex presos están

desamparados y siguen viviendo sin trabajar a costa de los fondos del contribuyente norteamericano, en países con situaciones económicas caóticas. Este Observatorio sirve a los intereses yanquis para tratar de demonizar a nuestro país ante la opinión pública internacional.

Puntualizando algunas cuestiones de los receptores de fondos del gobierno federal yanqui a través de la NED me referiré a algunos casos interesantes, por lo que ellos significan en todo ese entramado de instituciones y organizaciones vinculadas a la promoción de la contrarrevolución cubana. Me referiré en especial a la Afro-Cuban Alliance, Inc, al Center for a Free Cuba, al Directorio Democrático Cubano (DDC), al Instituto Político Libertad de Perú (IPL), a People in Need ya People in Peril.

En el caso de la Afro-Cuban Alliance, Inc. es necesario destacar que esta organización recibió *124,466* dólares (24 466 dólares más que en el año 2010), destinados fundamentalmente a promover dentro de Cuba sectores opositores amparados en supuestas luchas contra la discriminación racial en nuestro país. Desde hace algunos años algunos sectores dentro de Cuba apuestan por lo que llaman "afrocubanos".

El esquema de subversión contra Cuba, tiene entre sus metas extrapolar la situación de racismo que sufren los negros en muchos lugares en el mundo, incluido EE.UU. y para ello tratan entre otras aspectos, de incorporar al lenguaje de la contrarrevolución el término afrocubano o afrodescendientes, olvidando que en nuestro país no existen diferencias y que cuando se habla de cubanos se incluyen a negros, blancos, chinos y mestizos. En EE.UU. el término afrodescendiente o afroamericano, se utiliza para edulcorar el racismo que implica el tratamiento de "nigger" al negro en ese país.

Con estos recursos financieros han surgido en Cuba supuestos líderes ¨afrocubanos¨ comoJuan Antonio Madrazo, cabecilla del grupúsculo "Comité Ciudadano por la Integración Racial" (CIR), muy promocionado y que recibe apoyo técnico y financiero de instituciones norteamericanas. El propio Madrazo, quien se presenta con el cartel de "independiente", visita con asiduidad embajadas extranjeras en Cuba, en especial la SINA, para recibir instrucciones y acceder a Internet para difundir su accionar contrarrevolucionario. No es nada nuevo constatar que delincuentes comunes se conviertan de la noche a la mañana en líderes opositores en Cuba.

El Center for a Free Cuba recibió *55 000 dólares, destinados a* abastecer a los presos contrarrevolucionarios cubanos y sus familiares, así como para financiar a distintos representantes de la contrarrevolución interna, los cuales además de recibir dinero, reciben recursos tecnológicos y materiales para dar soporte a las campañas contra el gobierno cubano. Este centro ha sido objeto de auditorias, donde se evidenció que gran parte del dinero destinado a promover la contrarrevolución cubana ha sido dilapidado en función de los intereses de sus principales cabecillas en Miami. No obstante estos escándalos de corrupción, sigue recibiendo dinero del contribuyente norteamericano.

Vinculado también a escándalos de fraudes y apropiación indebida de los fondos del contribuyente norteamericano está el Directorio Democrático Cubano (DDC), organización que recibió 162 089 dólares para seguir financiando las transmisiones de su emisora anticubana "Radio República", absolutamente desconocida en Cuba y cuyos fondos han servido para financiar el modo de vida de sus principales directivos, en especial Orlando Gutiérrez Boronat, quien ha amasado una importante fortuna personal gracias a la "lucha anticastrista".

Los casos de las ONG´s People in Need (checa), People in Peril (eslovaca) y el Instituto Político para la Libertad (peruano) son paradigmáticos. Estamos hablando de organizaciones radicadas en terceros países, vinculadas al envío de emisarios para abastecer a la contrarrevolución y cuyo accionar anticubano ha sido denunciado en varias oportunidades.

People in Need recibió *160 202 dólares destinados a capacitar a periodistas independientes en Cuba, promover su trabajo a nivel internacional, en especial en los medios de prensa europeos y enviar emisarios para capacitar a estos supuestos periodistas y para identificar y capacitar a supuestos líderes comunitarios en la dirección de pequeñas empresas. Es decir, también se está involucrando en programas destinados a utilizar el proceso de perfeccionamiento de la economía cubana con fines subversivos. Su contraparte eslovaca, People in Peril, recibió 49 189 dólares para*

abastecer y entrenar a contrarrevolucionarios internos, en especial a los denominados periodistas independientes, educadores informales y bibliotecas independientes. Ambas organizaciones trabajan fuertemente en programas dirigidos a los jóvenes cubanos.

En el caso del Instituto Político Libertad de Perú, este recibió 61 727 dólares, utilizados para promover acciones contrarrevolucionarias dentro de la juventud universitaria cubana, facilitando a través de emisarios el entrenamiento en el uso del Internet y las redes sociales con fines subversivos. La principal cabecilla de esta institución, Yesenia Álvarez Temoche, fue expulsada en una ocasión de Cuba por sus vínculos con contrarrevolucionarios internos y no se esconde para anunciar el abastecimiento de recursos que hace a la "bloguera independiente" Yoani Sánchez.

Estos tres últimos casos evidencian cómo Estados Unidos evita repetir un nuevo Alan Gross, e impulsa el uso de personas de terceros países para abastecer y entrenar a la contrarrevolución interna. Ellos ponen el dinero y los demás ponen los hombres, a sabiendas de que están violando las leyes cubanas y pueden ser sancionados por ello. Esto emisarios son entrenados para decir que el trabajo que realizan es independiente y que no reciben para ello fondos del gobierno norteamericano.

El Informe de la NED del año 2011 evidencia que esta agencia yanqui está muy activa en su trabajo contra Cuba y que pese a todo seguirán destinándose millones de dólares para promover la contrarrevolución cubana. Al dinero de la NED se le suma el que recibe la USAID, el que utiliza el Departamento de Estado y el que destina la CIA a su campaña sucia contra Cuba.

Tantos millones invertidos y tan poco alcanzado. Su principal logro ha sido el que una camarilla en Estados Unidos se haya enriquecido y un pequeño grupo en Cuba que se autotitulan como opositores o disidentes, vivan sin tener que trabajar.

Fuente: Luis Miguel Rosales. Miradas Encontradas

EL SALVADOR

PAISAJES POLÍTICOS Y PAISAJES ELECTORALES

A esta altura del partido en el país, no todo lo político es electoral, pero si todo lo electoral es político. Cada fuerza social y política rompe con la cultura del último minuto y se prepara con mucha anticipación – año y medio-para colocarse en los primeros lugares de la carrera electoral presidencial. Y en esta situación, es conveniente distinguir entre escenarios políticos y escenarios electorales.

En política, las percepciones se convierten en realidades. Si alguien es percibido como débil esa es la realidad. Si alguien es percibido como fuerte esa es la realidad. Es una realidad mediática que termina por imponerse y determinar la imagen, no obstante que es una realidad construida, inducida, facilitada, pero se vuelve real, objetiva, fáctica. Lo que no significa que no pueda modificarse. Es posible, así como es posible que una simple cascara en el camino haga deslizar y derribe a un gigante.

A continuación abordamos estos aspectos, desde una óptica de movimiento popular o sea de izquierda social. Lo hacemos desde varios niveles de análisis: desde el teórico, desde el fotográfico (la situación del momento) y desde la prospectiva (hacia futuro). Lo político y la política del paisaje salvadoreño

Cuando nos referimos a lo político estamos hablando de ese amplio espectro que abarca una parte de la superestructura del edificio social y que se refleja en el aparato político-jurídico, que comprende el estado y su sistema político, incluyendo los partidos y las elecciones. La otra dimensión de lo superestructural es lo ideológico. Y la base del edificio social es la estructura económica, en este conocido esquema de análisis.

Mientras que cuando hablamos de la política nos referimos a las diversas expresiones de la lucha de clases, una de las cuales es precisamente la lucha política. Pero también está la lucha económica y la lucha ideológica. Lo político es el marco institucional legal, mientras que la política es el choque de

intereses y visiones entre las diferentes fuerzas sociales que se disputan el control del estado. Lo político es lo estable y continúo mientras que la política es el movimiento, el choque, la pelea entre fuerzas sociales con proyectos divergentes de país, que van originando las diversas correlaciones de fuerza, los distintos momentos y panoramas coyunturales.

El actual sistema político salvadoreño se establece en 1982, en el marco de un conflicto militar, y se fortalece en 1992 con la incorporación de la izquierda armada a la lucha política electoral. Y este sistema recibe en el 2009 un nuevo empuje, al verificarse la alternabilidad electoral sin ningún tipo de crisis significativa. El sistema comprobó por medio de la alternabilidad que podía asimilar cualquier opción política sin desmoronarse.

En lo político los niveles de consenso o disenso de las fuerzas sociales o políticas alrededor de las políticas de país, impactan profundamente en el funcionamiento de las instituciones del estado. En nuestro caso, la polarización ha sido la norma y no la excepción. Y lo seguirá siendo mientras no se modifique la actual correlación de fuerzas, que es de equilibrio, y viene así desde el conflicto armado.

Esta es una herencia de doce años de guerra que tuvo un desenlace negociado, por lo que el proyecto de país sigue sin definirse. Los cuatro gobiernos de ARENA no lograron romper este ciclo. Eso vuelve cada elección una batalla decisiva. Lo político – aunque cada vez menos- sigue vinculado a la disputa histórica por la continuidad o ruptura del sistema.

Lo político determina la política. Las líneas de los partidos y las acciones de los movimientos sociales, tanto empresariales como populares, así como la cotidianidad del ciudadano están atravesadas por las decisiones que desde lo político realizan los sectores gobernantes y que impactan en el ciudadano y en su economía, seguridad, costo de la vida, empleo, educación, salud, etc.

En la política impactan positiva y negativamente las políticas gubernamentales; las políticas municipales, las visiones y decisiones empresariales y de los sectores populares; la actitud de poderes fácticos que no van a elecciones, pero mandan, como son las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los Medios de Comunicación, y los Estados Unidos, entre otros.

En la política existe una campaña electoral en curso, con un candidato débil con un programa fuerte; un candidato fuerte con un programa débil y la posibilidad de un candidato fuerte con un programa fuerte. Pero a la vez existen otras variables a considerar en este horizonte, son el aparato partidario y la estrategia electoral. Y la ultima pero quizás la más importante, una sólida y bien protegida alcancía, o sea las finanzas, el financiamiento de la campaña.

La fuerza política que logre combinar de manera adecuada estas cinco variables lograra despejar la incógnita de la ecuación, y por lo tanto, encontrar el tesoro de la victoria electoral. Y son por lo menos tres las fuerzas en disputa. Y se han lanzado ya dos toreros al ruedo…y falta uno.

Un presidente Funes que va de salida

Ya relativamente falta poco para que el presidente Funes termine de darse la vuelta en el caballito de la presidencia. Ya camina por el cuarto y penúltimo año. Y con un envidiable nivel de popularidad, seguramente se prepara para emprender el viaje de regreso hacia la civilidad. Pero es claro que regresara al hogar con un cargamento político muy valioso. Experiencia, popularidad, relaciones y quizás recursos. Claro, sin aparato partidario. Pero a veces, los aparatos partidarios son cargas pesadas que es mejor evitar.

En lo que le queda de mandatario, el presidente Funes necesita garantizar su presencia y herencia como símbolo del cambio, en las diversas y principales opciones electorales presidenciales. Necesita blindar su gobierno de críticas y patentar como propios los diversos programas de compensación social que ha ejecutado. En esta tarea le va corresponder legitimar o torpedear candidaturas. No tiene opción. A menos que se decida por el silencio, lo cual es poco probable. Ha empezado a hablar y lo seguirá haciendo…

Y parece ser que se prepara para cabalgar como un experimentado jinete, afianzado de las crines de dos caballos en contienda, con una pierna en la izquierda y otra en la derecha. La apuesta es garantizar la continuidad de su novedoso proyecto político socialdemócrata consistente en una

alianza con EE.UU., el afianzamiento en el estado de un nuevo sector empresarial y los subsidios para sectores populares. Un coctel que seguramente va marcar el programa de los candidatos en contienda, hasta terminar entonando con voces diferentes una misma melodía.

Los tortuosos caminos de la ANEP

Es impresionante la capacidad del empresariado salvadoreño para mimetizarse y aparecer públicamente como abanderados de procesos de democratización, de lucha contra la corrupción y de abrirse a la construcción de alianzas que favorezcan la participación popular. Cosas veredes.

Y a la vez que se mantiene un discurso confrontativo, que pone en evidencia el dolor que causa haber sido desplazados de la conducción gubernamental, juega y coquetea con propuestas de exigir mayor transparencia en una gestión que ya no controlan.

Le correspondió a Jorge Daboub conducir el barco empresarial de la ANEP en esta tormenta que amenaza con hundirlos cada vez más en la irrelevancia. Y lo ha hecho ciñéndose al pie de la letra al papel asignado como gladiador frente al presidente Funes. Un triste papel que el anterior presidente de la ANEP, Carlos Araujo, se negó a desempeñar.

La nueva izquierda abraza la senda electoral

La decisión del partido Tendencia Revolucionaria de abrazar la senda electoral por medio del frente político Movimiento Nuevo País, MNP, constituye un nuevo desarrollo en las filas de la izquierda. Viene a sumarse a por lo menos tres esfuerzos anteriores de construir coaliciones y frentes de lucha popular. Entre estos podemos mencionar al MPJS (2008), a la CPC (2009) y al MDP (2011).

Es una decisión que viene a consolidar la tesis ya generalizada dentro de la izquierda y de la derecha, de la vía electoral como la única forma de acceder al poder. En este sentido, es un reconocimiento al sistema político establecido de democracia representativa, que niega o al menos debilita la opción de la lucha popular extraparlamentaria como vía al poder.

El que la TR sacrifique su antigua visión y estrategia de lucha popular a cambio de la participación en la lucha electoral, únicamente puede entenderse a la luz de la necesidad de crecer orgánicamente y convertirse en un significativo referente político municipal o legislativo, lo cual es posible pero no fácil.

Parece ser un retroceso en lo ideológico, pero un avance en lo político. La apuesta será seguramente recoger el descontento de sectores de izquierda al interior del FMLN y de los sectores populares. No será sencillo, hay una cultura de la organicidad que será difícil de romper.

La lucha por la unidad popular

La lucha popular se expresa en la actualidad en tres grandes vertientes que fluyen separadas, pero que pueden y deben unirse. La vertiente principal por su capacidad de convocatoria popular y de musculo organizativo es la vinculada al FMLN y que se manifiesta en dos grandes arroyos: CONPHAS y CIRAC. Son dos expresiones debido a los imperecederos ombligos históricos.

La otra gran vertiente de masas está vinculada a la labor social realizada por el gobierno Funes en el agro, con los excombatientes, con las mujeres y jóvenes, y con el movimiento sindical. Se expresa orgánicamente en la Unidad Nacional por la Defensa y Profundización de los Cambios. Hace unas semanas constituyó en el CIFCO el Movimiento Campesino Salvadoreño.

La tercera vertiente está relacionada con la TR. Se expresa en una serie de luchas, radios comunitarias y de redes sociales, en diversas partes del país, que incluye las importantes luchas contra la minería, por la defensa del agua, en contra de las presas, a favor de las luchas ambientalistas e indígenas.

La fuerza que desde la izquierda logre buscar entendimientos entre estas tres vertientes contribuirá de manera decisiva a la construcción de un poderoso instrumento de lucha popular, que rebase lo electoral y afiance la lucha popular antiimperialista como estrategia principal de los sectores revolucionarios y democráticos.

El Alcalde que sueña con ser presidente

Desde sus maromas provocadoras desde el 2008 en contra de la entonces alcaldesa Violeta Menjívar, Norman Quijano sabía que ganar San Salvador en el 2009 y luego en el 2012 lo convertiría al interior de su partido en el seguro candidato presidencial del 2014. Y efectivamente así sucedió.

Norman tiene como ventajas para garantizarle a ARENA la recuperación del ejecutivo las siguientes: capacidad ilimitada para prometer hasta lo imposible; la posibilidad de un relevo presidencial republicano en Estados Unidos, y la posibilidad de recursos y de la unidad del partido.

Las encuestas lo ubican como el próximo presidente, pero para que este sueño se convierta en realidad Quijano necesita resolver dentro de su partido líos pendientes con Cristiani, limar asperezas con los precandidatos derrotados, en especial con Doña Vilma; lograr que su popularidad en las bases areneras y en las encuestas haga el milagro de sacar las chequeras de los contribuyentes del partido; y finalmente, que desde su ya complicada alcaldía no surja una crisis que le amargue su dilatada marcha triunfal a saborear la guayaba de la presidencia.

El vicepresidente que sueña con ser presidente

Con la muerte de Schafik en el 2006, Salvador Sánchez Ceren aumentó significativamente su peso como uno de los líderes más respetados e influyentes en la dirección del FMLN. Destacado líder magisterial en la década de los setenta, y jefe máximo luego del suicido de Marcial, de las poderosas FPL. Fue un aliado estratégico de Schafik tanto durante el conflicto armado, durante el proceso de negociación y en la construcción del FMLN como fuerza político electoral.

La decisión de la dirección de FMLN de llevarlo como candidato obedece a la necesidad de evitar cometer el error de llevar a la presidencia a una persona que no refleje la línea partidaria, como pasa con el presidente Funes. Es un error que no volverán a cometer, aunque para ello necesiten sacrificar evidentes criterios electorales de potabilidad así como redoblar el esfuerzo por posicionarse en las urnas.

Pero como en política nada está escrito en piedra, la apuesta electoral del FMLN es a remontar las dificultades y lograr mediante una bien articulada estrategia de largo plazo entusiasmar a su militancia y enamorar al voto indeciso, el cual supuestamente tendrá la suficiente claridad para no caer víctima de la propaganda y defenderá las conquistas sociales logradas en este gobierno. En caso que esta sea una estrategia exitosa, el FMLN seguiría gobernando otros cinco años.

El expresidente que sueña con reengancharse

La sola mención de su nombre parece despertar vicios y pasiones olvidadas y temores incontrolables, y esto es ya un logro de su singular campaña mediática basada en la negativa y la incertidumbre. Lo real es que el expresidente Saca es un actor de ambiciosas pretensiones.

Y al convertirse en el tercero en discordia, estaría modificando profundamente el escenario de estas elecciones presidenciales. Tiene experiencia, carisma, relaciones y recursos. Y si cuenta con el aval del actual propietario residente de Casa Presidencial les cosas incluso se le facilitarían, ya que navegaría bajo la bandera del cambio.

Para la derecha arenera la candidatura del innombrable es una pesadilla porque saben que representa los intereses de un nuevo bloque histórico que pugna por establecerse y por desplazar definitivamente a la tradicional oligarquía. Pero también en la izquierda política resultan sospechosas las ya frecuentes concentraciones populares que se realizan sin su autorización y que hablan de “una tercera fuerza.”

Los candidatos Un ménage a trois o el bipartidismo tradicional

El FMLN se ve obligado a llevar un candidato histórico para garantizar la cohesión de su base interna y asegurar así el “voto duro.” Un voto duro que se paralizó en marzo pasado pero que se espera recuperar para el 2014.

La posibilidad de “una tercera fuerza” viene a modificar sustancialmente el esquema de polarización bipartidaria y puede afectar en diversos grados a los dos partidos grandes. Este menage a trois electoral puede tener resultados imprevisibles y alterar el balance de fuerzas existente hasta el

momento. El alargamiento premeditado de Saca es parte integral de esta estrategia y de la emergencia de este peligrosos triangulo.

Los programas subsidios vs. inversiones

Los subsidios y las inversiones aparecen como los polos sobre los que gravitaran los debates y las ofertas. ARENA se presentara como la opción para salvar la economía "estancada" mediante el impulso de la inversión extranjera y así crear empleos y disminuir el costo de la vida. A nivel de seguridad se les complica la situación porque "la tregua de las pandillas" es una medida exitosa que difícilmente podrán atreverse a cuestionar.

El FMLN se presentara como los continuadores de los cambios, y van a reivindicar y con razón los uniformes, zapatos y útiles escolares, el vaso de leche, la reactivación del agro, y hasta el subsidio al transporte.

Los aparatos partidarios y los indecisos

Tanto ARENA como el FMLN han logrado dominar la técnica y el arte de la lucha electoral. Son maquinarias electorales. El enfrentamiento electoral es su elemento, su hábitat natural. Y esto hará a las elecciones presidenciales de 2014 especialmente reñidas.

Lo que es un hecho para ambas maquinarias electorales es que ningunos comicios podrán ganare exclusivamente con su voto duro. Necesitaran conquistar el voto de los sectores indecisos, que son muy variables y responden fuertemente a percepciones del momento.

Las estrategias electorales: coalición o partido

Cada partido diseña una estrategia electoral que le permita fortalecer y multiplicar sus fuerzas, neutralizar cualquier tipo de amenazas y aislar para luego derrotar a su adversario. En la experiencia del FMLN la única vez que ha logrado la victoria ha sido mediante una amplia y multifacética alianza electoral.

Para ARENA la última vez que ha logrado alcanzar la derrota ha sido mediante una alianza que incluyo al PCN, al PDC e incluso al Movimiento Renovador. ARENA en cuatro ocasiones ha ganado solo y el FMLN únicamente ha ganado acompañado.

Los escenarios de futuro (tendencias y perspectivas)

Se pueden presentar diversos escenarios. La tendencia principal en la actualidad, a año y medio del evento electoral, es hacia la restauración oligárquica. Esto se puede modificar. Ojala que se modifique. Pero un claro escenario de futuro es la victoria de ARENA en primera vuelta. Para esto necesita rebasar la votación segura de su "voto duro" con más de medio millón de votos.

Otro escenario es la posibilidad de una segunda vuelta., sea entre ARENA y el FMLN, o entre ARENA y GANA. Algunos confían en que el "bloque" de fuerzas legislativo FMLN, GANA, CN y PES se va traducir en una alianza formal o informal que permitirá derrotar a ARENA en segunda vuelta. ¿Votaría la base del FMLN por Saca? ¿Votaría la base de GANA por Sánchez Ceren?

Un último escenario es el de un segundo gobierno del FMLN. Para lograr esto el FMLN necesita asegurar un resultado electoral que sobrepase con más de medio millón de votos su techo electoral histórico, que anda por los 800,000 votos. Esos votos debe obtenerlos por medio de una exitosa estrategia electoral o por medio de alianzas, o por ambos elementos.

Fuente: Roberto Pineda. CEPRID

GUATEMALA

JUEZ OIRÁ A VÍCTIMAS DE ESCLAVITUD SEXUAL

Ya ancianas y algunas con enfermedades terminales, 15 mujeres rendirán testimonio ante juez, como anticipo de prueba del caso que se sigue contra unas 37 personas que podrían ser acusadas de crímenes de lesa humanidad y de guerra, por tenerlas como esclavas sexuales en un destacamento.

Los hechos ocurrieron entre 1982 y 1986, en el destacamento de Sepur Zarco, donde al menos 15 féminas fueron víctimas de esclavitud y violación sexual, como arma genocida y femicida, durante el conflicto armado interno.

Uno de los testimonios que escuchará el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, entre el 24 y 28 de septiembre, es el de Luz(*), quien ahora tiene 56 años.

Ella no habla español, por lo que rendirá testimonio en quekchí. La mujer relata cómo soldados de los destacamentos de Pataxté y Tinaja llegaron a su casa, golpearon y se llevaron a su esposo a bordo de un tractor.

Para Luz, eso solo era el inicio del sufrimiento, pues frente a sus hijos, de 4 y 6 años, fue violada por cuatro militares, quienes, no satisfechos del daño, le ordenaron que saliera de la casa , la cual quemaron frente a ella, con los animales, comida y enseres que había dentro.

La crueldad fue tal, que Luz recuerda que se llevaron a 18 hombres y en todos los casos quemaron las casas. Incluso, el hijo de uno de ellos murió de hambre.

Los planes para Luz y otras vecinas de su comunidad , en Panzós, Alta Verapaz, no terminaban allí, ya que fue obligada a vivir junto a sus hijos en el destacamento de Sepur Zarco, en el área del Polochic, en el límite entre Izabal y Alta Verapaz, donde dos comisionados militares le ordenaron servir a los soldados. “Ellos eran los encargados de reunir a las viudas”, recuerda.

Para el descanso

El destacamento funcionaba como centro de recreación y descanso de la tropa, asegura Lucía Morán, directora ejecutiva de la organización Mujeres Transformando el Mundo.

Ese dato coincide con el testimonio de Luz, quien relata que incluso tenía órdenes de horas y turnos que debía cumplir en el destacamento, para lavar la ropa y cocinar para los militares.

Pero en cada turno, el cual era cada tres días en la mañana y en la tarde, un número no menor de cuatro, hasta seis soldados, abusaban de ella en cualquiera de los horarios.

Los abusos sexuales se cometían con tanta libertad que podían ser en una garita, en la orilla del río que pasaba por el lugar o en un cuarto del destacamento, siempre con pistola en mano o con la salvedad de que “somos la ley”. En cada ocasión eran diferentes militares, añade Luz.

“Estos abusos sexuales ocurrieron cada vez que llegué a hacer turno, y fueron por los ocho meses que estuve en el destacamento militar cocinándoles a los del Ejército. Casi siempre fue un grupo de seis soldados, solo que eran distintos, por cada turno”, recuerda.

Ella asegura que lo más que pudo hacer fue salir del destacamento, aunque dejó de ser violada, pero debía continuar cocinándoles desde su casa.

Morán asegura que este es el primer caso del conflicto armado que vincula el poder directamente con la violencia política de ese momento, pues empresarios de ese entonces pidieron destacamentos para asegurar sus fincas y evitar que campesinos titularan supletoriamente las tierras.

Todos los hombres detenidos eran líderes que buscaban titular sus tierras.

Cadenas de mando

El proceso abarca a miembros de cuatro cadenas de mando del Ejército de ese entonces, según Morán.

Esta es la primera vez que una corte nacional conoce este tipo de procesos penales, ya que los anteriores fueron conocidos por tribunales internacionales.

Fuente: Sandra Valdez

HONDURAS

HONDURAS: LOS TERRATENIENTES Y LA OLIGARQUÍA SIGUEN MATANDO.

En el transcurso de 48 horas fueron asesinados en Honduras dos defensores de los derechos humanos. El domingo caía acribillado Antonio Trejo Cabrera, apoderado legal de un grupo de campesinos del Valle de Aguán que reclaman sus tierras en la región de Colón, arrebatadas por terratenientes. El letrado había denunciado amenazas y solicitado protección para él y sus familiares.

Dos días después, el fiscal de Derechos Humanos en Choluteca, Manuel Eduardo Díaz Mazariego, de 40 años, fue atacado en plena mañana por sicarios que le acribillaron desde una motocicleta con la que luego huyeron del lugar. El asesinado, que también era profesor de Derecho se dirigía a su oficina luego de realizar unas diligencias propias de su cargo en Tribunales. Era oriundo de Tegucigalpa y deja seis hijos pequeños, el mayor de 12 años. Según los peritos policiales, Díaz Mazariego recibió once impactos de bala. El fiscal era considerado una persona consecuente en su tarea. Ya en abril del 2008 había participado junto a otros fiscales de una huelga de hambre para exigir una serie de medidas en favor de la transparencia y contra la corrupción en ese ministerio público.

Los sucesores del gobierno golpista que derrocó al gobierno constitucional de Manuel Zelaya en junio del 2009, han resultado dignos herederos de ese legado de violencia e impunidad. Durante el gobierno de Porfirio Lobo, han sido asesinados 74 abogados y más de veinte periodistas o profesionales de la comunicación. Su mandato alcanzó el reconocimiento de Estados Unidos y de gran parte de lo que se denomina “la comunidad internacional” a pesar de ser el resultado de unos cuestionados comicios realizados por los golpistas. La corrupción y el crimen crecen en un marco de total impunidad. Los asesinatos selectivos de aquellos que “molestan” al poder, o a los terratenientes, son algo cotidiano.

Desde las Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, exigió al gobierno de Porfirio Lobo que termine con la impunidad, en referencia a los asesinatos de activistas campesinos, miembros de la Resistencia, periodistas, abogados, y defensores de los DD.HH. en Honduras. Navi Pillay, afirmó que "en Honduras hay un amenazante clima de inseguridad y violencia. Y los defensores de los derechos humanos son objetivo de amenazas, acoso y asesinato. La impunidad que rodea estas violaciones es inaceptable." Estos pedidos se suceden desde hace años cada vez que se produce un asesinato de similares características. La respuesta oficial es "lamentar lo sucedido" y prometer que "se investigará a fondo". A veces se detiene a algún "sospechoso", como para calmar a la opinión pública, pero nunca se llega a procesar y condenar a los responsables de instigar esos crímenes, generalmente ejecutados por sicarios pagados.

"Si algo me sucede..."

El defensor de campesinos Antonio Trejo, abogado indigenista, había enviado a Washington un documento en el que apuntaba a los responsables de lo que pudiera pasarle. “ De sucederme algo a mí, a mis nietos o a mi familia, responsabilizo a los señores Miguel Facussé (y otros) quienes pueden atentar contra mi vida mediante sicariato, ya que saben que las demandas que hay en su contra están prosperando y los campesinos van a recuperar las tierras que les despojaron ilegalmente.”

Facussé es un poderoso terrateniente, miembro de una familia acaudalada de Honduras que estuvo totalmente implicado en el golpe cívico-militar que terminó con el gobierno de Mel Zelaya en el 2009. Además de defensor de los campesinos, Trejo Cabrera era también precandidato a diputado por el Frente Amplio Popular de Resistencia, (FAPER).

Los funcionarios del gobierno de Lobo, y el propio presidente, han vuelto a repetir sus lamentos y promesas de que “los crímenes serán esclarecidos”. En realidad, más del 90 por ciento de estos homicidios permanecen impunes y nadie ha sido condenado por ellos.

"Nos están exterminando con total impunidad"

Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) afirmó que el abogado Trejo estaba muy comprometido tanto con la defensa de los

derechos de las familias campesinas del Bajo Aguán, como en la salvaguarda de la soberanía nacional, amenazada por el proyecto de crear las llamadas "ciudades modelo". En una entrevista con el periodista Giorgio Trucchi, la dirigente popular afirmó que "aquellos que conspiran contra el pueblo, no tienen ningún reparo en eliminar a quienes les estorben en su propósito de hacer negocios en el país". Añadió Bertha Oliva que los terratenientes y las familias que reiteradamente han sido señaladas como las que se han adueñado ilegalmente del país, están en una ofensiva en contra del campesinado, de la y los defensores de los derechos humanos, así como de quienes acompañan al pueblo en su demanda de justicia social.

Declaró que las instituciones del estado están ausentes, desplomadas, incapaces de actuar con justicia, en colusión con los asesinos. "Y nos están asesinando, exterminando con total impunidad. Nos sentimos solas, agobiadas y demandamos, exigimos la presencia de la comunidad internacional al lado de este pueblo". También denunció que le preocupa que el Departamento de Estado norteamericano diga en su informe que en Honduras ha habido avances en materia de justicia y de eficiencia del Ministerio Público. "La impunidad no se combate con mentiras, ni con más militarización o involucrando en una supuesta solución a los que fomentan y son cómplices de la impunidad."

La dirigente popular hondureña dio mucha importancia a la solidaridad internacional y dijo que la coordinación con los grupos y redes que difunden lo que de verdad pasa en Honduras va a ser clave en esta coyuntura.

El silencio es complicidad

En el 2009 publicamos varios artículos con amplios datos sobre la conspiración de las "100 familias" que controlan Honduras y sus intereses que terminó con el derrocamiento de Zelaya. Después otros sobre la Resistencia Popular. Y en abril del 2010 circulábamos una reflexión que titulábamos : "¿Se acuerdan de Honduras ?"

(Ver en nuestra página www.serpal.info el Envío 317) . Y escribía entonces: "*Si en alguna facultad de periodismo quisiera explicarse lo que es la manipulación u ocultación de la realidad por los medios, no faltarían argumentos. Pero en estos dias, lo que sucede en Honduras y el silencio que cubre y protege la represión sistemática del gobierno de Porfirio Lobo y el "reordenamiento" del país según los intereses de su oligarquía y de las transnacionales, sería un ejemplo difícilmente superable."* Se torna indispensable repetir la pregunta: "¿ Se acuerdan de Honduras ?", porque el silencio sigue siendo cómplice de la represión sistemática de su pueblo.

Los dos nuevos asesinatos que describimos en esta nota, se suman a una ola represiva iniciada a partir del golpe militar de junio del 2009, pero que continuó durante el gobierno de Lobo. Los escuadrones de la muerte siguen actuando con total impunidad. El gobierno de Obama, la secretaria de Estado Hillary Clinton, el secretario de la OEA Miguel Insulza y otros cómplices significativos en América Latina, han tolerado y permitido, primero el derrocamiento golpista de un gobierno constitucional, y después, la continuidad con otros nombres, de los mismos intereses oligárquicos y excluyentes controlando Honduras.

Estos graves sucesos apenas ocupan espacio en los medios de comunicación hondureños, empresas privadas que en su casi totalidad están controladas por los intereses de las cien familias que controlan el país. Los medios independientes o alternativos, cerrados o amenazados, apenas tienen llegada a la población hondureña.

El silencio internacional también acompaña la dura travesía del pueblo de Honduras, ya que las agencias y los medios controlados por las grandes corporaciones consideran que ese país tiene “un sistema democrático", y callan o minimizan lo que sucede.

Recojamos el reclamo de la luchadora Bertha Oliva y difundamos "lo que de verdad pasa en Honduras".

Fuente: Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL

MÉXICO

POR LA SOBERANÍA NACIONAL CON LOS TRABAJADORES

En la crisis que vivimos se hace cada vez más necesario asociarse para defender los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos indios, de los empleados y, sobre todo, de las juventudes. Es necesario unirse en torno a un proyecto de lucha por la soberanía nacional, por los recursos nacionales y por los derechos sociales, culturales, políticos y económicos que los gobiernos neoliberales les han ido conculcado y que pretenden seguirles arrebatando, con un partido de Estado disfrazado de varios partidos con distintos nombres y la misma política de recolonización de México.

Empecemos por no ocultarnos las verdades dolorosas que vivimos. México está importando maíz, gas y gasolina. Es como si Bolivia importara papas, Argentina carne y Francia perfumes.

Estamos por sufrir un nuevo despojo del petróleo, que todavía es fuente de una proporción muy alta de los ingresos fiscales y que era el más preciado patrimonio nacional.

Estamos aumentando cada vez más la inmensa deuda pública, que un día nos van a cobrar los *shylocks*trasnacionales en condiciones peores que las de España, Italia o Grecia.

Nos seguimos endeudando, tanto en forma rápida y furiosa como lenta y calmada, pero abiertamente impune, todo para comprar armas y mercancías que, lejos de servir a la producción y el desarrollo, inflaman la destrucción y el genocidio nacional, y se usan para pagar las importaciones de maíz y petróleo, antes símbolo y fuerza de nuestra soberanía alimentaria y energética, y garantía, con el Ejército, de la seguridad nacional.

Estamos asignando cada vez menos recursos a la educación y a la investigación científica y humanística, como si el proyecto fuera hacer de México y de su juventud y su niñez un país tan miserable como los más miserables de la Tierra, fuente de explotación de una fuerza de trabajo descalificada, base de dominación de un país de hombres y mujeres perdidos en la ignorancia y en el basurero de desechos de la industria del norte.

Estamos viviendo la crisis de un sistema político y de una clase política que entre la ceguera, el oportunismo y la corrupción priva más y más a los ciudadanos, a los trabajadores y a los pueblos de México de los recursos legales necesarios para luchar y negociar. Y que ahora nos anuncia nuevas medidas por las que pretende privatizar y desnacionalizar aún más la riqueza del petróleo y arrebatar a los trabajadores los derechos que lograron tras una revolución en la que dieron la vida más de un millón de hombres y mujeres, de jóvenes, de niñas y de niños.

Y mientras esto ocurre, la desregulación de los trabajadores se da sin cesar, la depauperación de los campesinos hace que millones padezcan sed y hambre, y es creciente el asedio a los pueblos indios, en especial a los zapatistas, que tratan de construir uno de los proyectos autosostenibles más avanzados y democráticos de la tierra.

Al mismo tiempo las corporaciones mineras y agroindustriales despojan a los habitantes de sus territorios y recursos, empleando cuanto medio es necesario, incluido el terror que por todas partes siembran junto con el megacomercio del *narco* y con el lavado de dinero de la gran banca de Georgia, de las Islas Caimán y de Wall Street.

Salir de los infiernos que las corporaciones construyen y en los que muchos centroamericanos y mexicanos viven resulta cada vez más difícil, pues a la gran muralla que el gobierno estadunidense levantó para impedir un peligro por sus estrategas previsto, se añaden las matanzas y desapariciones colectivas de braceros mexicanos y centroamericanos que no alcanzan a llegar con vida a la frontera.

Muchos de estos y otros males afectan al conjunto de la nación. Corresponden a algo más que un modelo de desarrollo: son resultado de la política neoliberal y globalizadora de las corporaciones y complejos que dominan el mundo, encabezados por Washington y Wall Street, hechos innegables y ampliamente comprobados, que están haciendo víctimas crecientes hasta en su propio país.

Reconocer la inaceptable realidad en que vivimos, y cobrar conciencia de lo que significa para nosotros y para nuestros descendientes el futuro que les preparan, es tan necesario como formular un programa mínimo de defensa de los derechos de los trabajadores, de los pueblos, y de los ciudadanos que, uniéndose en torno a la lucha por recuperar y consolidar la soberanía nacional, fortalezca al estado de derecho e impida la criminalización de los trabajadores, de los ciudadanos y de los pueblos que defienden sus legítimos derechos y su libertad.

Una nueva lucha por la independencia, una nueva lucha por la democracia real de un pueblo en verdad soberano, tiene que articular a los trabajadores industriales, agrícolas y de servicios, a los hombres, mujeres, niños y niñas, a los asalariados y no asalariados, regulados y desregulados, precarios, excluidos, desplazados. Tiene que articularlos a todos ellos y proponerse practicar la comunicación, la información, el diálogo y la acción concertada en una organización que junte las redes de los colectivos presenciales y a distancia, y que abarque al conjunto de la nación, vinculando a sus habitantes con los de América Latina y con los del mundo para la lucha por la vida y la libertad. Esa gran organización tendrá que cultivar una vigorosa moral de lucha y de solidaridad, y una voluntad colectiva a la que caracterice la lucidez y la firmeza para defender y decidir el futuro del México y del mundo que queremos, y que podemos hacer… ¡que haremos! ¡y que sin duda ustedes harán!

* Mensaje leído en la sexta Conferencia Sindical Nacional

Pablo González Casanova, en http://alainet.org

NICARAGUA

"NO NECESITAMOS DE TROPAS NORTEAMERICANAS EN NUESTRO TERRITORIO", DICE PRESIDENTE ORTEGA

La celebración del 33º aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua fue ocasión para que la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Policía nicaragüense, recordara los importantes resultados logrados en estos años, en cuanto a seguridad ciudadana y combate al narcotráfico y al crimen organizado.

"Pese a tener la fuerza de seguridad más pequeña de la región, escasos recursos y una economía aún débil, Nicaragua registra los mejores indicadores y ventajas comparativas de cara a la seguridad ciudadana en Centroamérica", dijo Granera.

Para lograr estos importantes resultados que, entre otros, colocan a Nicaragua como uno de los países con la tasa de homicidios más baja de América Latina (12 por cada 100 mil habitantes), la Primera Comisionada remarcó la política de Estado impulsada por el gobierno sandinista "que ha priorizado la seguridad de las familias y ha combatido de forma frontal al crimen organizado transnacional", dijo.

También subrayó la importancia de los valores y principios revolucionarios "con que fuimos formados los y las policías nicaragüenses", así como del modelo policial preventivo, proactivo y comunitario "profundamente enraizado en la comunidad", dijo.

Un modelo que durante el periodo del gobierno sandinista (2007-2012) se ha fortalecido "al reincontrarse con el modelo de gestión de gobierno del cual nació, que también es participativo y comunitario", agregó Granera.

La Directora General de la Policía señaló que la institución, con el apoyo del gobierno, ha trabajado en tres direcciones, que son la integración regional, la coordinación interinstitucional interna con la participación de las comunidades y el fortalecimiento de los valores y principios éticos en la institución.

Después de presentar los logros alcanzados en estos años, Granera rindió homenaje al fallecido comandante Tomás Borge Martínez, "quien puso la primera piedra de esta institución y no se cansaba de repetirnos que soñaba que Nicaragua tuviera la mejor Policía de América Latina, no tanto por su técnica, sino por su capacidad de amor y de servicio a su pueblo", concluyó.

Artículo completo en http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2012/09/nicaragua-no-necesitamos-de-tropas.html

PANAMÁ

PRESIÓN POPULAR DEL PUEBLO INDÍGENA NASO LOGRA DIÁLOGO CON GOBIERNO NACIONAL

Luego de la presión naso durante el miércoles 19 y jueves 20 de este mes, las autoridades locales y las bases del pueblo naso logran un acuerdo para establecer un diálogo franco y serio con el Gobierno Nacional, encabezado por el Ministro de Gobierno Ricardo Fábrega.

Entre los puntos a debatir están:

- La revisión e indemnización justa por las tierras negociadas entre algunas familias y la empresa.
- La contaminación del río Teribe – Bonyic.
- La violación y removimiento de sitios arqueológicos por maquinarias de la empresa.
- La gobernabilidad basada en una Ley Comarcal.

Luego de horas de cierre este jueves 20, familiares de los protestantes y comunidades aledañas denunciaron la forma injusta como la empresa actúa desde un inicio, sin transparencia alguna ante el verdadero valor y tenencia de la tierra, acción traducida en engaño y manipulación de la información. Este hecho se hace notorio ante la ausencia del Rey Naso Alexis Santana y de su compromiso de actuar a favor de la población indígena.

en todo momento es cuestionable el rol del Rey y de su comisión al no tener una posición seria para decisiones. Sus consultas fueron siempre realizadas hacia las autoridades nacionales y no a sus bases, conformadas por aquellos quiénes lo respaldaron en su elecciones.

Mucho más evidente fue su carente decisión de exigir respeto al valor ancestral y arqueológico, dada la violación y fragmentación del Patrimonio Histórico cometida por la Empresa Pública Medellín EPM mediante su Proyecto Hidroeléctrico Bonyic.

También hay que destacar la ausencia de los medios de comunicación (escrito, radial y televisivo) que no han dado fiel muestra de información sobre el aislamiento que de costumbre la provincia de Bocas del Toro padece sobre hechos sociales y ambientales.

Se espera para los próximos días mayor divulgación sobre las exigencia de las bases nasos ante el cumplimiento del estado en por el resto y autodeterminación como pueblo indígena. Para el lunes 24 se espera sobre el terreno una reunión determinante con todos los sectores en conflicto.

Informa: Mariátegui en http://www.kaosenlared.net/

VENEZUELA

LA ACCIÓN DE LA CIA EN VENEZUELA.

El COS (Jefe de Estación CIA) en Caracas tiene mucho trabajo, tanto que a veces sobrepasa sus fuerzas a pesar de que se mantiene en su aislada oficina hasta altas horas de la noche. No es para menos, aunque su Estación sea de las más grandes y la cantidad de “oficiales de caso” en la misma atrevidamente grande. El COS tiene mucho de qué preocuparse en Venezuela. Nuevas formas y vías han surgido en el andar cotidiano de su Oficina, y ahorita, el COS responde por las acciones de otras agencias e instituciones del gobierno norteamericano dedicadas a la subversión, como la USAID, el IRI, el NDI y las ya veteranas instituciones “pantallas” de la CIA: Freedom House y NED. Y es que a cada una de ellas, se le han destinado recursos multimillonarios para lograr el derrocamiento del proceso bolivariano venezolano, sin importar la vía. Puede ser preparando un magnicidio, un golpe de Estado, creando líderes opositores o preparando la manipulación de las

próximas elecciones presidenciales, en la que los súper analistas de Langley dan como seguro vencedor al Comandante Hugo Chávez.

Los secretos de la NED.

Una de estas agencias subversivas es la NED, denunciada ampliamente como una institución pantalla de la CIA y que en Venezuela desde hace años está trabajando para derrocar la Revolución bolivariana, como mismo trabaja contra Bolivia, Ecuador y Cuba. El caso venezolano es particular y denota que su trabajo contra Venezuela es ilegal y utiliza métodos y medios de trabajo más semejantes a un servicio de espionaje

Para muestra un botón: en su informe relacionado con el trabajo desarrollado hacia Venezuela durante el año del 2010 (aún la NED no ha publicado su informe del año 2011) se recoge que la NED invirtió en el 2010 un total de 2 866 046 dólares. Este dinero se destinó a siete (7) grandes programas: Responsabilidad; Educación Cívica; Ideas Democráticas y Valores; Derechos Humanos; Libertad de Información; Fortaleciendo ONG y Fortaleciendo Instituciones Políticas. También al Instituto Republicano Internacional (IRI, por sus siglas en inglés), pero no nos engañemos con estos nombres tan sugestivos y nobles. Detrás de ellos se esconde un maquiavélico y bien estructurado diseño subversivo dirigido a crear instituciones y líderes políticos con el objetivo de enfrentarse a la Revolución venezolana, prepararlos en formas de "lucha pacífica" a semejanza de las supuestas "Revoluciones de Colores" tal como recoge el Manual subversivo de Gene Sharp. Para ello se impartieron cursos teóricos y prácticos, entrenamientos variados, se financiaron viajes al exterior, en especial a países de América Latina y a Estados Unidos, se trabajó con la juventud venezolana, con supuestos sectores marginados como las mujeres y los negros, a quienes definen como afro-venezolanos.

Estas agencias subversivas norteamericanas, en especial la NED y la USAID aumentaron el financiamiento a grupos juveniles opositores contra el gobierno de Chávez, y jóvenes venezolanos financiados por estas instituciones visitaron Washington y recibieron entrenamiento en técnicas "no violentas" de lucha en el propio Instituto Albert Einstein de Gene Sharp. (www.kaosenlared.net/noticia/wikileaks-washington-intento-fomentar-revolucion-colores-cuba-venezuel). Recordemos las marchas de estudiantes de derecha con las manitas blancas pintadas. Desglosando en parte este informe anual del trabajo secreto de la NED en Venezuela sobresale que en lo relacionado con la Responsabilidad, con un presupuesto de 118 280 dólares, trabajaron en función de desarrollar talleres con vistas a preparar determinados sectores políticos para que estuvieran en la capacidad de enfrentar a los gobiernos municipales bolivarianos o fortalecer aquellos donde los partidos de la oposición dominaban. En lo relacionado con la "Educación Cívica", financiada con 349 932 dólares, su trabajo se dirigió a organizan talleres, seminarios, eventos, a crear líderes juveniles opositores dentro de la población negra venezolana, históricamente marginada por los gobiernos que antecedieron al de Hugo Chávez. También para crear líderes juveniles dentro de otros sectores venezolanos, como las mujeres, las comunidades pobres, los barrios de la clase media y los universitarios, así como instituciones y movimientos sociales juveniles. Estos sectores juveniles recibieron (y recibirán) asesoramiento en la utilización de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, a la vez que se les entrenó (y entrenará) para accionar de conjunto con otras organizaciones y movimientos opositores ya establecidos en el país. Mediante el programa "Ideas Democráticas y Valores", con un monto de 74 234 dólares, se brindó entrenamiento intensivo a unos 200 líderes jóvenes opositores en ocho (8) ciudades venezolanas, quienes fueron seleccionados por su irrestricto apoyo a las directrices del Norte. El programa "Libertad de Información", con 99 397 dólares, se encaminó a fortalecer a la gran prensa opositora venezolana, adiestrando a periodistas y editores para crear matrices de opinión, campañas y difundir calumnias contra el proceso bolivariano, en especial aquellas referidas a supuestas violaciones de la libertad de expresión en el país. Con su programa "Derechos humanos", con un presupuesto de 85 180 dólares, se trabajó para crear en las comunidades indígenas líderes y grupos opositores, con capacidad para enfrentar al gobierno venezolano. También el programa trató de fomentar campañas internacionales ante supuestas violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno bolivariano y sus instituciones. Un punto especial lo tuvo el financiamiento destinado al Instituto Republicano Internacional, institución que también recibe fondos del gobierno norteamericano a través de la USAID, y cuyo trabajo subversivo contra Venezuela ha sido

denunciado en varias ocasiones. Este instituto recibió 706 180 dólares, gastados en preparar con fines opositores a miembros de la sociedad civil venezolana, así como a promover supuestos líderes políticos. “

. El tiempo que resta para las elecciones cada día es menor y se conoce que la oposición está lista para accionar ante el seguro triunfo del PSUV en estas elecciones, elevar al máximo sus campañas de descrédito y tratar de llevar al país a un estado de inestabilidad e ingobernabilidad que permita la intervención extranjera y por esa vía, el fin del gobierno revolucionario. Tal es el interés principal de la oposición y de sus financistas desde el exterior. Vemos entonces, que la amplia maraña creada en Venezuela por la CIA, la USAID, la NED, el IRI, Freedom House, el NDI y otros tiene un solo fin, derrocar al gobierno del comandante Hugo Chávez, para lo cual cuentan con sus cipayos internos, a los que tratan infructuosamente de mantener en el anonimato.

Por Javier Salado para Resumen Latinoamericano. (Texto resumido)

PREPARATIVOS DE GOLPE DE ESTADO.

Fuentes de alta credibilidad han informado que el 7 de octubre, antes de las 3 de la tarde, dirigentes de la MUD dirán al mundo, a través de todo el aparataje de medios de comunicación internacional que ya está organizado para ello, que Capriles Radonski está ganando las elecciones para crear las condiciones que les permita más tarde, cuando el CNE dé los primeros resultados ACUSAR de que se trata de un fraude y generar la reacción violenta de sus seguidores, acompañados de la reacción de sus aliados cómplices internacionales que ya también están preparados para ello.

A esto se suma que hemos detectado a través de la inteligencia social de sectores populares en los barrios la actuación de Primero Justicia, uno de los partidos oligarcas- con bandas armadas delincuenciales que han tenido azotados a algunas comunidades; se han estado reuniendo en las noches y guardando grandes bultos a altas horas de la noche.

La solidaridad mundial, las redes de la paz y la justicia deben actuar a tiempo, informando y organizándose, comunicándose con nuestras embajadas, realizar foros, encuentros donde se analicen las estrategias que los imperialistas se están planteando desarrollar ante la inevitable victoria de Hugo Chávez.